Desigualdad, violencia y desarrollo. La Economía Política de los conflictos civiles armados

Rafael Muñoz de Bustillo Llorente
Universidad de Salamanca*

Resumen. El presente trabajo analiza las aportaciones más recientes que desde el análisis económico se han realizado con la intención de explicar cuáles son los determinantes de los conflictos armados en la actualidad. Para ello, en una primera parte se repasa cuál ha sido la intensidad de los conflictos bélicos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, repaso que nos permite concentrar nuestra atención explicativa en los conflictos civiles, con mucho los más numerosos, así como en los países en vías de desarrollo. En una segunda sección se documentan las múltiples vías mediante las cuales las guerras civiles afectan a la capacidad económica de los países. Por último se estudian los principales determinantes económicos de las guerras civiles.

Palabras clave. Guerra civil, Desarrollo económico.

Clasificación JEL. O10,O43, N40.

Abstract. This paper reviews the economic literature aiming at understanding the roots and causes of civil armed conflicts. In order to do so, the first section shall revise the evolution and intensity of armed conflict since the World War II. This review clearly shows how civil armed conflicts are, by far, the most common type of conflicts, and how developing countries are the most common scenario of such conflicts. In a second section we document the economic implications of civil war for developing countries. Finally we study the economic determinants of civil war.

Key words. Civil war, Economic development.

JEL classification. O10,O43, N40.

1. Introducción

En el mundo de la Economía es habitual considerar el comercio como una forma de superación de la violencia[1]. Un planteamiento que no es exclusivo de esta rama de las Ciencias Sociales, tal y como se recoge, por ejemplo, en el libro XX del *Espíritu de las Leyes* de Montesquieu (1689-1755), dedicado a las leyes con relación al comercio, donde se señala que «la paz es el resultado natural del comercio», o «el espíritu del comercio produce en la mente del hombre cierto sentido de justicia exacta, opuesto […] al robo», o «En todos los sitios vemos cómo la violencia y la opresión deja paso al comercio basado

* Este trabajo se presentó, en versión resumida, como ponencia en el *I Encuentro sobre Economía Política León 2006*.

1 Para un debate sobre el papel civilizador *versus* destructor de valores del capitalismo véase Hirschman (1982).

en la economía»[2]. Desde la Economía, la obtención de bienes o servicios mediante el intercambio voluntario, en vez de mediante la violencia física, el robo y la imposición, se explicaría por la dificultad de que este último sistema de incrementar la riqueza se pueda utilizar de forma permanente como fuente de renta, ya que utilizado con excesiva frecuencia podría dar lugar a la desaparición de las fuentes de renta sobre las que se depreda.

Ello, junto a los costes derivados del ejercicio de la violencia también para el que la ejerce, explicaría, desde este enfoque, la sustitución de la amenaza por el intercambio, y la violencia por el comercio, y su relegación a una actividad secundaria y esporádica. De hecho, y aunque se pueden encontrar multitud de ejemplos donde el comercio ha sido antecedido por la violencia, desde el episodio en 1854 del Comodoro Perry forzando la apertura del Japón, pasando por las Guerras del Opio (1840-42) o la Colonización de África, en donde el comercio, aunque fuera sangriento, se entendía como una de las herramientas de civilización del continente (*the white man's burden*), lo cierto es que más modernamente el comercio se ha entendido en general, incluso desde la óptica de la política, como una herramienta de callar a los «perros de la guerra», algo de lo que la creación de la CECA en 1951 y la CEE en 1957 sería un claro exponente.

Por su parte, el comercio en particular y la actividad productiva en general necesitan para su desarrollo disfrutar de un contexto de estabilidad y certidumbre jurídica que posibilite la inversión. En caso contrario, esto es, en el caso de que el riesgo de ver arrebatado por la fuerza el resultado de la actividad productiva sea alto, ésta se limitará sólo a aquellas actividades con un margen de beneficio muy elevado, que compensen ese mayor riesgo, y a aquellas otras de mera subsistencia. En palabras de Laiou (2002), en el contexto del resurgimiento político de Bizancio en los siglos X y XI, «la mejora de la seguridad dentro de las fronteras del imperio supuso que los campesinos pudieran cultivar sus campos sin estar sometidos a un riesgo constante de que los frutos de su labor fueran apropiados por el enemigo y que sus recursos productivos fueran destruidos por razias» (pág. 714). El mecanismo subyacente a este planteamiento es similar al que establecen los parásitos con respecto a los cuerpos en los que habitan y de los que viven, donde un exceso de absorción de recursos del mismo provocaría la muerte del ser que parasita y consecuentemente la del propio parásito. Por otra parte, en presencia de riesgo de violencia contra las personas o las cosas, la sociedad y sus miembros se verán obligados a desviar recursos productivos para la creación de mecanismos de protección contra las agresiones, ya externas ya internas, a su vida y hacienda, lo que reducirá la capacidad de la sociedad de generar excedente. La importancia de este factor es tal, que para la *nueva historia económica*, con las tesis de Douglas C. North como máximo exponente, el nacimiento del capitalismo estaría íntimamente vinculado con los avances a la hora de garantizar la seguridad jurídica de los agentes económicos frente a las arbitrariedades del poder político, la depredación y la delincuencia.

Es difícil, por no decir imposible, encontrar ejemplos de países que hayan sido capaces de prosperar en un contexto de inseguridad jurídica y conflictividad social, mientras que los períodos de paz y reglas claras de funcionamiento económico, esto es, aquellos en donde la

[2] Las citas son de la versión en hipertexto del *Espíritu de las Leyes* disponible en: http://www.constitution.org/cm/sol.txt

extracción de rentas por parte del poder político se da en un contexto de relativa certidumbre (sometida a reglas) normalmente están asociados bien con períodos de bonanza económica, especialmente cuando tales extracciones no son confiscatorias, bien con períodos de estancamiento, pero rara vez de decadencia (a no ser por razones exógenas). Parece así que la paz, entendida de forma amplia como ausencia de violencia contra las cosas y las personas, no sólo es un bien en sí mismo, sino un bien con profundos beneficios económicos.

Desde una aproximación global se pueden identificar cuatro vías de ruptura o deterioro de la seguridad: (1) lo que se puede denominar delincuencia y *violencia desestructurada*, esto es, el ejercicio privado de la violencia por parte de un individuo o grupo de individuos con una finalidad meramente crematística; (2) la *violencia estructurada interior* desarrollada con la finalidad de alcanzar el poder político y las ventajas a él asociadas: guerras civiles; (3) la violencia estructurada entre dos o más países, o *violencia estructurada exterior*, ya sea con la finalidad de ampliar el ámbito espacial de ejercicio del poder político y acceder a nuevos recursos económicos, las guerras de territorios o recursos de antaño, ya sea para asegurar las fronteras; (4) por último existiría una cuarta vía, asociada al terrorismo internacional, entendido como una violencia con una finalidad distinta a las anteriores, y no como una táctica más en el ejercicio de violencia por una de las causas arriba señaladas. Cada una de estas rupturas de la paz tiene sus propias causas y efectos sobre la actividad económica, pero todas comparten, en mayor o menor medida, el tener una relación dialéctica con el medio económico en el sentido de que afectan a la actividad económica: la violencia tiene un coste económico importante, y a su vez se ve afectada por ésta, ya que se puede argumentar que algunas de las causas de la violencia se encuentran en el funcionamiento de la economía.

En las páginas siguientes analizaremos los determinantes económicos de la violencia, fundamentalmente *violencia estructurada interior* que, junto con la *violencia desestructurada*, son las dos formas de violencia dominantes en el mundo actual. La limitación de nuestro análisis a esta cuestión tiene un fundamento básicamente de espacio, ya que el análisis que de ambos tipos de violencia se hace desde la Economía comparte muchos elementos, al tiempo que en la práctica una y otra forma de violencia se encuentran íntimamente ligadas, al menos en los países en vías de desarrollo. Por un lado, es frecuente que tras la resolución de los conflictos armados se produzca en los países afectados por ellos, especialmente en el caso de guerras civiles, un aumento de la violencia desestructurada, tanto por el deterioro de las restricciones morales a la realización de actos violentos derivado de la guerra[3], como por problemas asociados a la desmovilización de combatientes, en muchos ca-

[3] Un ejemplo de ello es el caso de los «niños soldados» que tristemente han protagonizado muchos conflictos civiles en África, notablemente el que desde 1987 tiene lugar en la región del norte de Uganda, habitada por los Acholi, desencadenado por el *Lord's Resistance Army*, LRA, con una estrategia de secuestro temporal o permanente de niños y jóvenes. De acuerdo con un informe del *Survey of War Affected Youth* (SWAY), de abril de 2006, un 78% de los secuestrados había sido testigo de un asesinato, el 63% había sido golpeado duramente, al 58% se le había obligado a robar, el 20% había sido obligado a matar a un desconocido y el 8%, a matar a un familiar o amigo. El temor a estas razias ha hecho que al caer la tarde caravanas de niños entre 3 y 17 años, conocidos como *night commuters,* recorran distancias de hasta 20 kilómetros hacia pueblos seguros para pernoctar en ellos libres de las acciones del LRA.

sos sin una inserción económica fácil en la vida civil. Un caso paradigmático de ello es El Salvador, donde tras el fin de una cruenta guerra civil que duró doce años la tasa de homicidios pasó de 72 por cada cien mil habitantes en 1990 a 139 en 1995 (Cruz, Trigueros y González, 2000).

Desde otra aproximación Mueller (2003) defiende que muchas guerras modernas se parecen más a acciones de delincuencia desestructurada, de pillaje y saqueo por grupos irregulares, que a las guerras tradicionales donde los ejércitos en contienda intentan controlar mediante instituciones propias los territorios que conquistaban. De este modo, Mueller distingue entre «guerra criminal» y «guerra disciplinada», donde la primera estaría protagonizada por mercenarios en el caso de conflictos tradicionales y por «señores de la guerra» en el caso de guerras no convencionales, y se caracterizarían por el recurso a bandas de delincuentes, la baja intensidad de las mismas, el menor interés en el fin de la contienda, desde el momento en que ésta se convierte en su forma de vida, y los ataques a civiles (de los que obtienen botín). Aunque Mueller defiende que muchas de las contiendas de las últimas décadas pueden entenderse en estos términos mejor que en términos de guerras convencionales, esa falta de demarcación clara entre delincuencia y guerra también se ha dado en otros momentos históricos; en palabras de Tilly (1990): «En una época de soberanía fuertemente fragmentada […] Las diferencias entre soldados, bandidos, piratas, rebeldes y nobles cumpliendo con su obligación se difuminaban en un continuo de acciones coercitivas» (pág. 184), o en palabras de Braudel (1966): «Detrás de la piratería de los mares se encontraban las ciudades y las ciudades estado […] detrás del bandidaje, esa piratería terrestre, estaba la ayuda continua de los aristócratas» (págs. 88-9).

Como paso previo al análisis de los determinantes económicos de los conflictos civiles que ocupará la sección 3 de este artículo, la sección 2 se dedicará a presentar algunas cifras sobre la intensidad de la violencia estructurada en el mundo actual y se comentarán algunos trabajos que intentan acotar sus efectos económicos. Por último, en la sección 4 se resumirán las principales conclusiones alcanzadas a la luz de las cuales se presentarán algunas propuestas de política económica.

2. Evolución e intensidad de la violencia estructurada

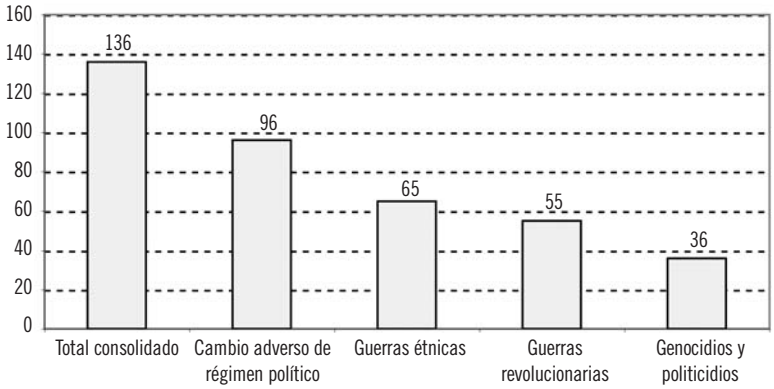
Siguiendo con la clasificación desarrollada más arriba, y centrándonos en la violencia estructurada, ya sea de carácter interno o externo, de acuerdo con la *State Failure Task Force* del *Centre for International Development and Conflict Management* (**Gráfico 1**), desde 1955 hasta 2001 se produjeron 135 episodios consolidados de fallo o hundimiento del Estado, incluyendo 119 guerras étnicas o políticas, y 36 episodios de genocidio o «politicidio» junto con algo más de un centenar de episodios de cambio violento y regresivo de régimen, lo que nos da una idea de la cotidianidad de este tipo de acontecimientos, especialmente en regiones como África subsahariana que supone el 32% de los casos[4].

[4] Una cotidianidad que, en ningún caso, es exclusiva de esta región y este momento de la historia. Como apunta Tilly (1990) refiriéndose a la Europa de los siglos XVI y XVII, «no merece la pena preguntarse *cuándo* estaban los estados en guerra, ya que la mayor parte de los estados estaban en guerra continuamente» (1990, pág. 184).

Aunque, como señala Marshall (2001), las estimaciones de muertes derivadas de conflictos violentos no son sólo inexactas y poco fiables, sino que «trivializan y distorsionan el impacto de la guerra sobre los sistemas sociales, viola los supuestos estadísticos, y hacen una gran injusticia a los análisis completos y humanísticos de la guerra» (pág. 5), esta información es un elemento importante para entender la magnitud y evolución de los conflictos armados. En conjunto, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los casi 400 conflictos violentos considerados, prácticamente en su totalidad localizados en países menos desarrollados, provocaron un mínimo de 24 millones de muertes (Marshall y Gurr, 2005). Desde una aproximación temporal, en el **Gráfico 2** se recoge un indicador del número de muertes relacionadas con combates de los distintos conflictos violentos que se han producido desde 1946 hasta 2002, entendiendo por éstas las bajas, ya sean civiles o militares, derivadas de los combates, y por lo tanto dejando fuera las resultantes del ejercicio de la violencia generalizada por parte de uno de los contendientes (como el genocidio de Ruanda) y el resto de muertes asociadas al hundimiento de las infraestructuras sanitarias, reducción de las posibilidades de subsistencia de la población y aumento de la violencia que acompañan a los conflictos armados[5]. A pesar de ello, esta variable, como señalan Lacina y Gleditsch (2005), ofrece una medida más ajustada de la escala y capacidad de los ejércitos contendientes, y por lo tanto refleja la intensidad del conflicto (aunque no de la catástrofe). El **Gráfico 2** recoge tanto la persistencia de los conflictos durante la segunda mitad de la pasada centuria, y su coste en términos de vidas humanas, como la relativa desaceleración de éste tras el final de la guerra fría.

La primera conclusión que se obtiene del **Gráfico 2** es que, contra lo que a veces pudiera parecer de la lectura de la prensa, las bajas en combate de las distintas guerras acti-

Gráfico 1. *Casos de «fallo» de Estado por tipo de acontecimiento (1955-2001)*

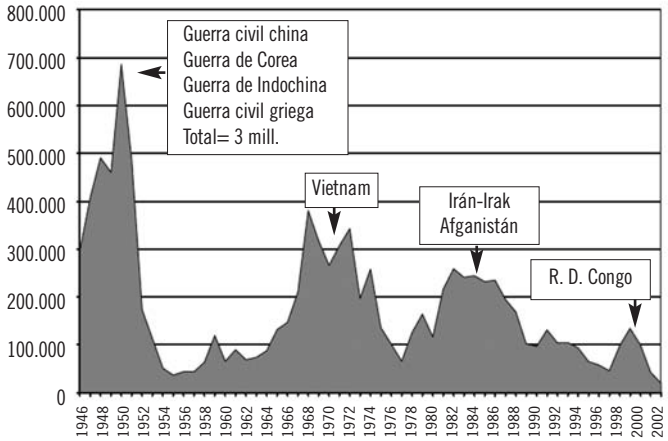


Fuente: Goldstone *et al.* (2000) y SFTF revisión 2001.

[5] Un ejemplo de la diferencia entre las víctimas directas de un conflicto bélico y las víctimas totales se puede encontrar, para el caso de la 2.ª guerra de Irak, en Burnham *et al.* (2006)

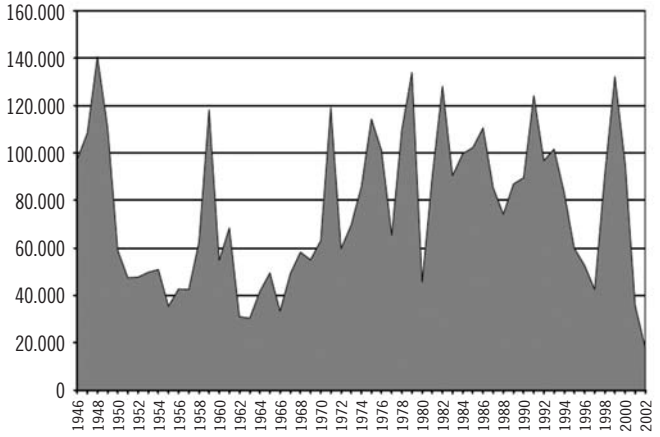
vas a comienzos del siglo XXI son significativamente menores que en cualquier otro momento de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, esta conclusión, siendo válida, puede dar una imagen distorsionada de la realidad, ya que la tendencia decreciente en la intensidad de los conflictos recogida en el gráfico obedece a la existencia de 5 grandes conflictos armados (Las guerras de Vietnam, Corea, Irán-Irak, Afganistán y la guerra civil China) que explican los picos más altos de la gráfica. Cuando representamos la evolución de las muertes en combate descontando estos cinco conflictos el resultado obtenido, en términos de tendencia, es menos alentador (**Gráfico 3**), observándose la ausencia

Gráfico 2. *Muertos en combate 1946-2002 (principales conflictos en los recuadros)*



Fuente: Lacina y Gleditsch (2005), pág. 154.

Gráfico 2. *Muertos en combate 1946-2002 sin los cinco principales conflictos bélicos*

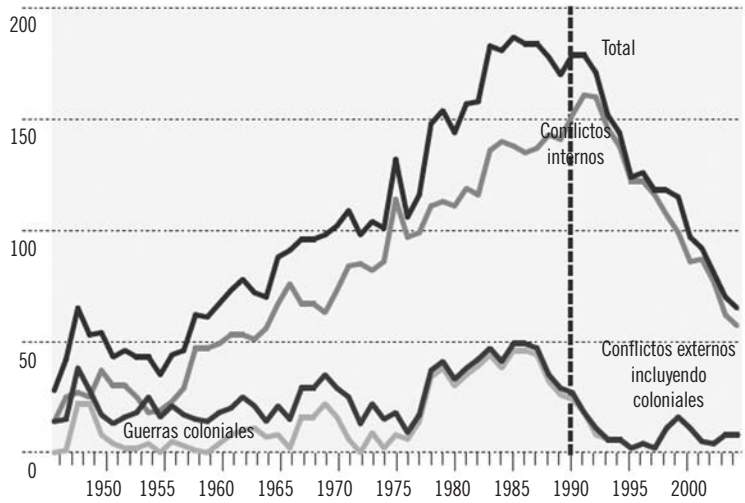


Fuente: Lacina y Gleditsch (2005), pág. 156.

de tendencia alguna, con un perfil muy inestable en cuanto al número de muertos. La guerra de Sudán y la guerra de Irak (con alrededor de 600.000 muertes por causas violentas según estimación de Roberts *et al.*, 2006), no incluidas en el gráfico, harían elevarse otra vez la línea de muertes en combate desde los valores anormalmente bajos de 2002.

Por último, y con la finalidad de ofrecer un análisis más completo del número e intensidad de los conflictos violentos del último medio siglo, en el **Gráfico 3** se recoge el índice de magnitud total de conflictos violentos construido por Monty Marshall (2001) a partir de una categorización de los conflictos de 1 a 10, donde la categoría más alta correspondería al *exterminio* y *aniquilación* sistemática y a la destrucción indiscriminada de recursos, y la más baja a la *violencia política esporádica*, con objetivos difusos o mal definidos y haciendo uso de una tecnología de bajo nivel. De acuerdo con esta clasificación en el período contemplado no se habría producido ningún conflicto con intensidad superior a 7, que correspondería a lo que Marshall denomina *guerra generalizada,* donde los recursos, sin embargo, son limitados de forma que la continuidad del esfuerzo bélico depende de apoyo exterior (Vietnam, 1985-75, Afganistán, 1978- ?, o Ruanda, 1999), serían ejemplos de este tipo de nivel de conflicto). El índice total obtenido es el resultado de la suma de los índices de cada conflicto. Como se puede apreciar, hasta 1990 existe un aumento constante de la intensidad de conflictos violentos, mientras que desde entonces se produce una abrupta caída, tanto en las guerras interestatales (las menos frecuentes desde la Segunda Guerra Mundial), como en los conflictos internos. En lo que a estos últimos se refiere, mientras que en el período 1996-1990 había 40 conflictos de autodeterminación en marcha, en el período 2000-04 la cifra se había reducido a 25

Gráfico 3. *Magnitud total de los conflictos violentos, 1964-2004*



Fuente: Marshall y Gurr, 2005, pág. 11.

(Marshall y Gurr, 2005, pág. 25). Como tendencias negativas, destacan la extensión de la violencia en los países musulmanes, el legado de sociedades debilitadas tras muchos años de contienda o el «sobrante» de personal y material militar derivado de las mismas, que en muchas ocasiones se destina hacia actividades de violencia desestructurada.

Si nos limitamos a las guerras civiles, sobre las que nos centraremos en estas páginas por ser las cuantitativamente más importantes, Fearon y Laitlin (2002) contabilizan en el período 1945-99 un total de 122 guerras civiles (13 de ellas coloniales). Según el criterio de demarcación utilizado por estos autores, para que un conflicto violento sea considerado como guerra civil es necesario que cumpla las siguientes condiciones: más de mil bajas directas, más una media anual de 100 bajas y un mínimo de 100 bajas entre ambos bandos. De acuerdo con este criterio, el período analizado experimentó una tasa de estallidos de guerras civiles de 2,2 por año, mientras que la tasa de resolución de conflictos se situaba en 1,8, lo que implica el aumento del número de conflictos activos. Simultáneamente la duración media de los mismos pasa de dos años en 1947 a 15 en 1999. Este resultado es coherente con las conclusiones alcanzadas por Collier *et al.* (2004) sobre los determinantes de la duración de los conflictos civiles, sobre las que volveremos más adelante, en el sentido de que las posibilidades de alcanzar la paz en los conflictos activos en las dos últimas décadas del siglo pasado serían más bajas que en las décadas precedentes.

Como elemento de comparación, para situar los conflictos armados en el contexto más amplio de violencia desestructurada, de acuerdo con la séptima oleada del *Survey on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems*[6], y concentrándonos en los homicidios, que por sus características se consideran el tipo de delito más completamente recogido por este tipo de estadísticas[7] (además de ser el de unas consecuencias en términos de bienestar más elevadas) en 2000 en los 71 países para los que se dispone de información se registraron cerca de 200.000 homicidios. Si bien las tasas son muy diferentes entre países, yendo de los 0,5 por cada 100.000 habitantes de Japón o Arabia Saudita a los 88 de Swazilandia o los 62 de Colombia. Entre los países con mayor índice de criminalidad destacan varios de América Latina.

3. Los costes de los conflictos armados

Las dificultades de medición de la intensidad de los conflictos armados y la violencia, ya sea estructurada o desestructurada, palidecen cuando lo que se pretende medir es su coste. Y ello porque a las carencias de información se le suma la necesidad de acudir

6 Disponible en http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_survey_seventh.html

7 Tampoco en lo que se refiere a la violencia desestructurada es fácil disponer de datos. En este caso se cuenta con dos tipos distintos de fuentes, aquéllas derivadas de los sistemas de seguridad, policía y sistema judicial, de cada país, y las obtenidas directamente mediante encuestas de víctimas, ambas con problemas significativos. Las primeras se enfrentan al problema de que no todos los delitos se denuncian a las autoridades, mientras que las segundas sólo están disponibles para un número limitado de países, 45 en el caso de la tercera oleada del *International Crime Victim Survey* ICVS, de los que sólo 14 eran países menos desarrollados. En todo caso, a la hora de utilizar estos datos, especialmente en los países menos desarrollados, es importante ser cautelosos ya que la tasa de denuncia de los delitos en estos países es significativamente menor (Soares, 2003).

a métodos poco satisfactorios para estimar el impacto de las pérdidas de ella derivada. El ejemplo más claro de ello, pero no el único, es el método de estimación del valor de la vida utilizado habitualmente en los análisis económicos, consistente en calcular el valor actual de los ingresos futuros que la persona fallecida habría obtenido a lo largo de su vida laboral, algo que inevitablemente conduce a obtener valores muy distintos según el país de residencia y el tipo de trabajo de la persona cuyo valor de la vida se pretende estimar. En todo caso, este tipo de ejercicios es útil aunque sólo sea para conocer el orden de magnitud de los costes asociados a la violencia.

Un listado de los costes en términos de sus implicaciones sobre el desarrollo económico de la guerra civil incluiría, al menos, los siguientes:

a) Destrucción del capital físico y de las infraestructuras del país, tanto por acciones deliberadas (destrucción de puentes, por ejemplo), como resultado de la desaparición de las labores de mantenimiento de las mismas. Por ejemplo, se estima (Brück, 2001) que la guerra civil de Mozambique mantenida durante casi 20 años entre el Gobierno y la RENAMO supuso la destrucción de alrededor del 40% de capital fijo de los sectores de agricultura, comunicaciones y administración. A finales de 1989, poco antes del fin de la contienda, más de la mitad de las escuelas primarias habían sido cerradas como consecuencia de la guerra, un ejemplo de la estrategia de desestabilización de la RENAMO dirigida a la destrucción de la infraestructura social (Hanlon, 1991, pág. 41). En Sudán, de acuerdo con Johnson (2003), era habitual que el ejército gubernamental destruyera las infraestructuras (pozos, escuelas, dispensarios, etc.) de aquellos pueblos que no podían mantener bajo su control. Una estrategia similar se ha observado más recientemente en la región de Darfur en este mismo país como mecanismo para forzar el desplazamiento de la población civil.
b) Destrucción del capital natural: minado de tierras que dificulta la actividad agrícola, deforestación (agente naranja en Vietnam), exterminio de fauna (casos de Uganda o Mozambique), contaminación radioactiva y por petróleo (Irak).
c) Congelación de la inversión, incluyendo en muchos casos la inversión rutinaria de sustitución. Imai y Weinstein (2000) estiman que cuando una guerra civil llega a afectar a la mitad del territorio nacional, la caída de la inversión supera los cuatro puntos porcentuales. Aunque referidas a la delincuencia común, los resultados de las encuestas del Banco Mundial sobre clima de inversión sirven también para hacerse una idea del efecto que la inseguridad tiene sobre la inversión. Según estas encuestas más de un 50% de las empresas de todas las regiones consideran que el crimen es un fuerte obstáculo para el desarrollo de sus actividades. En concreto, el porcentaje de empresas que identificaban el crimen como una restricción importante o muy importante al desempeño de su actividad alcanzaba el 37% en Nigeria, el 50% en Zambia, el 70% en Kenia y el 80% en Guatemala. En Jamaica 2/3 partes de las empresas encuestadas declararon haber sido objeto de algún tipo de robo, con un coste estimado para las PYME del 9% de sus ingresos[8].

[8] World Bank, (2005), pág. 89

d) Fuga de capitales y caída en la tasa de ahorro. De acuerdo con el análisis de Collier *et al.* (2002), el país menos desarrollado, PMD, representativo mantenía un 9% de su riqueza privada en el exterior, al término de una guerra civil esta magnitud había subido hasta el 20%, un resultado que los propios autores califican de conservador, y que no se frena al finalizar la contienda, ya que la fuga de capitales se mantiene (alcanzando un 26%) hasta que no se recupera la certidumbre sobre el futuro del país.
e) Desviación de recursos productivos hacia actividades de destrucción, con lo que se amplifica el impacto negativo de la desviación de recursos sobre el crecimiento del PIB: en situación de paz el PMD representativo dedica alrededor del 2,8 % del PIB a gastos de defensa, mientras que en situación de guerra civil este porcentaje pasa al 5% (Collier *et al.*, 2003, pág. 14). De acuerdo con las simulaciones de Knight, Loayza y Villanueva (1996), esta desviación añadida de recursos hacia actividades bélicas, de mantenerse durante un período de siete años (la duración media de los conflictos civiles), provocaría una caída permanente del PIB de alrededor del 2%. En la medida en que los grupos rebeldes también desvían recursos (no contemplados en la estimación anterior) hacia actividades bélicas, el impacto final será considerablemente superior. Por otra parte, es posible que parte del aumento de los presupuestos de defensa se mantenga una vez terminada la contienda, afectando negativamente al crecimiento incluso una vez acabada la guerra. De ser así, a este efecto negativo habría que sumarle, de acuerdo con Collier y Hoeffler (2004b) el hecho de que este aumento de gasto militar, lejos de reducir la probabilidad de reactivación del conflicto, estaría señalizando a los rebeldes la falta de intención del Gobierno de cumplir los acuerdos suscritos para acabarlo, facilitando por lo tanto su reactivación[9].

En lo que se refiere al peso relativo de los ejércitos con respecto a la población total de los países, no parece que exista una relación clara entre grado de desarrollo (medido mediante el PIB *per capita*) y grado de militarización, entendido como la relación militares-población total (el coeficiente de correlación es 0,06). La tasa media mundial de soldados por mil habitantes es de 3,15, y como se puede apreciar en el **Cuadro 1** la situación de los países en los distintos tramos de gasto no muestra ningún patrón claro en términos de PIB *per capita*. Sí parece existir una cierta, aunque muy ligera, correlación negativa entre tamaño de la población y grado de militarización (coeficiente de correlación de -0,16), como si los países grandes necesitaran ejércitos más pequeños (con relación a su población) para considerarse seguros[10].

[9] Si el aumento de gasto en defensa va unido a un aumento del peso de los militares en las actividades de gobierno, ello, además, derivaría en un aumento del riesgo de conflicto, ya que, de acuerdo a los resultados alcanzados por Sechser (2004), los Estados con un fuerte control civil son menos propensos a activar acciones militares que aquéllos dirigidos por militares. Este resultado iría en contra de la creencia de que los militares, conocedores de primera mano de los sinsabores y el drama de la guerra, son más cautos que los civiles a la hora de decidir entrar en guerra.

[10] Un claro ejemplo de lo anterior es Grecia, un país de 11 millones, con una tasa de militarización del 16%, la más alta de Europa, y Turquía, su tradicional enemigo, con 71 millones de habitantes y una tasa de militarización del 7%, con todo la segunda más alta de Europa.

Este indicador refleja, sin embargo, cómo los países situados en zonas tradicionalmente conflictivas, como Oriente Medio, tienen unas tasas de militarización más elevadas, con el consiguiente efecto presupuestario[11].

f) Desequilibrios macroeconómicos: déficit público, inflación y aumento del desempleo. Los Gobiernos en época de guerra suelen acudir a los controles de precios para evitar la

Cuadro 1. *Países de acuerdo a su tasa de militarización,* t_m *(militares/población x 1.000)*

$t_m > 40$	$20 < t_m < 30$	$10 < t_m < 20$	$5 < t_m < 10$	$t_m < 2$
Corea del Norte	Israel	Armenia	Albania	Argentina
Eritrea		Bahrein	Arabia Saudita	Bangladesh
		Chipre	Argelia	Brasil
		Chad	Azerbaiyán	C. Rica
		EAU	Bielorrusia	Canadá
		Grecia	Bostwana	China
		Guinea Bissau	Burundi	Costa de Marfil
		Jordania	Bután	Filipinas
		Corea	Camboya	Gambia
		Líbano	EEUU	Ghana
		Libia	Egipto	Guinea
		Omán	Finlandia	Honduras
		Singapur	Kuwait	India
		Siria	Laos	Indonesia
			Macedonia	Jamaica
			Malta	Japón
			Marruecos	Kenia
			Noruega	Lesotho
			R. Checa	Luxemburgo
			Rusia	Madagascar
			Ruanda	Malawi
			Serbia y Montenegro	Malí
			Seychelles	México
			Turquía	Moldavia
			Uruguay	Mozambique
			Vietnam	Níger
				Nigeria
				Papúa
				RCA
				Senegal
				Sudáfrica
				Suiza
				Tanzania
				Tayikistán
				Timor Este
				Togo
				Zambia

Fuente: World Bank (2006), *Child Soldiers Report 2004* y elaboración propia.

[11] Un análisis de la relación entre tamaño del ejército y riesgo de conflicto se puede encontrar en Hegre y Sambanis (2006).

aparición de inflación, si bien estos controles rara vez son efectivos, dando lugar a la aparición de mercado negro y la reducción de la base impositiva. Por otra parte, si el esfuerzo bélico se financia mediante endeudamiento, el peso del conflicto sobre la economía trascenderá a la duración del conflicto mediante un aumento de la carga de la deuda.

g) Aumento de la tasa de mortalidad, tanto directamente como resultado del conflicto, como indirectamente producto del deterioro de las condiciones sanitarias y de subsistencia asociado al mismo. La imposibilidad de muchas personas de continuar con sus actividades de mercado o de subsistencia, y el hundimiento de los servicios públicos sociales y las redes comunales derivan en la aparición de hambrunas y enfermedades. En lo que a esto respecta hay que señalar que a finales del siglo XX la mayoría de las víctimas de las guerras (cerca del 90% de acuerdo con Cairns, 1997), eran civiles, a diferencia de los conflictos militares de principios de siglo. De acuerdo con estimaciones aportadas por Lancina y Gleditsch (2005), las muertes en combate supusieron entre el 12-16% de las 150.000-200.000 muertes de la guerra de Liberia (1989-96), entre el 15 y el 29% de las 0,5-1 millón de muertes de la guerra de Mozambique (1976-1992), pero menos de un 2% de 1,5 millones de muertes de la guerra de Angola (1975-2002) o el 3 % de los dos millones de muertes derivadas de la guerra de Sudán. A modo de ejemplo, según estimaciones de Coghlan *et al.* (2006) la mayor parte de las 3,9 millones de muertes asociadas a la guerra de la República Democrática del Congo (1998-2004) se debieron a enfermedades fácilmente prevenibles y tratables y no a la violencia.

h) Movimientos internos –desplazados– o externos –refugiados– de población. Estos movimientos son en muchos casos el resultado de una estrategia deliberada de los contendientes para reducir la capacidad de resistencia de sus enemigos[12]. Las implicaciones de este tipo de procesos son múltiples y van desde la pérdida de capital social al deterioro del capital físico y ambiental de las zonas despobladas, hasta el aumento de las enfermedades de transmisión sexual y de otro tipo, asociadas las primeras a la violencia sexual que en determinados casos abunda en los campos de refugiados. Junto a este tipo de desplazamientos, los conflictos aceleran la emigración (que en algunos casos se anticipa al propio conflicto), lo que deriva en una pérdida de capital humano.

i) Aumento de la incidencia de enfermedades en general (e infectocontagiosas como el SIDA en particular) según los combatientes[13] van marcando nuevas vías de expansión de la enfermedad, tanto en el proceso de conquista de nuevas áreas (con las secuelas de violaciones que normalmente acompañan este tipo de acciones), como después de su desmovilización tras el fin del conflicto y su regreso a las zonas rurales de las que provienen muchos de los combatientes, que hasta su regreso estaban

[12] Sobre esta cuestión véase Azam y Hoeffler (2002).

[13] La prevalencia del SIDA entre los militares es normalmente muy elevada, llegando al 40-60% en Angola y la República Democrática del Congo, al 61% en Sierra Leona, al 27% en Uganda y al 6,5% en Camboya (Collier *et al*., 2003, pág. 27).

relativamente libres de SIDA. En Ruanda, la tasa de prevalencia del SIDA en zonas rurales pasó del 1% antes del conflicto (1994) al 17% en 1997; de acuerdo con otra fuente, la *Asociación de Mujeres Violadas del Genocidio*, el 67% de las mujeres que sobrevivieron a las violaciones eran seropositivas[14]. Asimismo se produce un rebrote de enfermedades por interrupción de programas sanitarios (campañas de vacunación, malaria, etc.)[15] o debido al traslado de gran cantidad de población (desplazados y refugiados) por zonas insalubres[16]. Al efecto sobre la salud de la destrucción de infraestructura sanitaria hay que sumarle el impacto sobre la reducción de la actividad económica y el desvío de fondos públicos hacia las actividades bélicas en deterioro de las prestaciones sanitarias básicas.

j) Según estimaciones de las Naciones Unidas, alrededor de 300.000 niños y adolescentes por debajo de los 18 años de edad forman parte de unidades implicadas directamente en combates o han sido desmovilizados recientemente, lo que supone alrededor del 10% de los combatientes. Entre 30.000 y 50.000 niños soldados participan en los diversos conflictos abiertos en el Congo, lo que casi supone un tercio de todos los combatientes, en Sudán se calcula que son 100.000 los implicados en las más de dos décadas de guerra civil. En Myanmar (Birmania) se estima en 75.000 el número de niños soldados en el ejército y los distintos movimientos armados, en Irán alrededor de 100.000 niños lucharon y murieron en la guerra contra Irak[17], en Sierra Leona hasta el 80% de los combatientes del RUF eran niños entre 7 y 14 años (*Save the Children*, 2000). Además de las razones éticas y morales existentes para limitar a los 18 años la edad de conscripción, el uso de soldados niños y adolescentes tiene otras implicaciones importantes en términos de ruptura del proceso educativo, desgajamiento de sus comunidades de origen y problemas de convivencia familiar (en países donde las relaciones de parentesco son vitales para la inserción social), problemas de adaptación en general a la vida civil y reducción de los ingresos[18].

k) Redistribución de la renta, normalmente a favor de actividades de búsqueda de rentas y en contra de actividades productivas. A diferencia de lo que a menudo se seña-

---

[14] *Violence against women and HIV/AIDS: Critical Intersections*. Information Bulletin Series, Number 2. *The Global Coalition on Women and AIDS*. WHO (2005).

[15] De acuerdo con el estudio de Garfield *et al.* (2002), de la comparación de la evolución de los casos de malaria en las regiones nicaragüenses más y menos afectadas por la guerra de 1983 a 1985, en las 8 regiones más afectadas los casos aumentaron un 17% con respecto a la media 1974-82, mientras que en las 8 menos afectadas se redujeron en un 62%.

[16] En lo que a esto respecta, Montalvo y Reynal-Querol (2004) no encuentran esta misma relación cuando el desplazamiento de población responde a la existencia de sequías y hambrunas, lo que se explicaría tanto por la menor permanencia de este tipo de refugiados en los campos de refugiados, como por la utilización de vías convencionales de comunicación para acceder a los mismos, con menor presencia de mosquitos, que la huida campo a través, característica de los movimientos de población en situación de conflicto.

[17] World Bank (2006), pág. 181.

[18] En palabras de un informe sobre los niños soldados abducidos del LRA de Uganda: «el secuestro, al reducir el tiempo en el colegio y en el trabajo, y acarrear en algunos casos daños físicos y trauma tiene un impacto a largo plazo sobre sus posibilidades en el mercado de trabajo» afectando tanto a sus ingresos (un 24% más bajos como media), como a su carrera profesional (Annan, Blatman y Horton, 2006, pág. 44).

la, para algunos agentes económicos la guerra es una actividad perfectamente «racional», al suponer la aparición de oportunidades de negocio, ya sea mediante el saqueo y el robo, mediante la intermediación, facilitando el acceso a la explotación de recursos otrora fuera de su alcance, explotando el tipo de mercados que florecen en las contiendas bélicas: armamento, uniformes, etc., u operando en los mercados negros y de contrabando que los acompañan. También económicamente la guerra tiene ganadores y perdedores. Gran parte de estos efectos se mantienen en el tiempo una vez acabados los conflictos: el cese de hostilidades no supone una vuelta a empezar, sino que está documentada la existencia de un *efecto resaca* que actúa perpetuando gran parte de los efectos negativos (como mayores tasas de mortandad) durante un número significativo de años.

l) Junto con la reducción de la activad económica las guerras suelen ir acompañadas de un cambio en las posibilidades y fuentes de subsistencia de la población. En lo que a esto respecta, Stewart y FitzGerald (2001) señalan que los conflictos armados derivan en una reducción de las actividades de mercado y un aumento de las actividades de subsistencia, fruto de la incertidumbre y la escasez de *inputs* productivos en el mercado, junto con la propia desaparición de muchos mercados por problemas de transporte e inseguridad, con un impacto negativo sobre la productividad. En Uganda, por ejemplo, la economía de subsistencia pasó del 20 al 36% durante la guerra.

El impacto agregado de todos estos efectos sobre el bienestar, el PIB y el crecimiento económico de los países en conflicto es, sin duda, no sólo negativo, sino que alcanza una dimensión significativa, hasta merecer el calificativo de «desarrollo a la inversa» (Collier *et al.* 2003). Sin embargo, se puede argumentar que en la medida en que la guerra dé paso a la recuperación, y que el capital destruido sea repuesto por capital que incorpore una tecnología más avanzada, la posguerra puede estar asociada a tasas de crecimiento más elevadas de las que se habrían alcanzado en ausencia de ese *shock* bélico. Asimismo, siguiendo el análisis de Olson (1982) de la acción colectiva, si la guerra sirve para desplazar a las élites dominantes que frenaban por interés propio el proceso de crecimiento (con la reasignación de recursos y la redistribución de rentas que conlleva), entonces los conflictos civiles podrían dar lugar a una sociedad más dinámica, con menos ataduras derivadas de los intereses del *establishment*. Por las dos vías se alcanzaría por lo tanto un crecimiento superior tras la contienda, aunque las cadenas de transmisión serían distintas: la reposición del capital destruido por un lado, y el cambio en las instituciones de gobierno por otro. Por ello, al evaluar el efecto de la guerra sobre el desarrollo económico es importante distinguir tres plazos distintos: el impacto inmediato durante el tiempo de conflicto, el efecto sobre el crecimiento a corto plazo y el efecto sobre el crecimiento a largo plazo.

Existen distintas estrategias para estimar los efectos de los conflictos civiles. La primera de ellas consiste en expresar en términos monetarios cada uno de los costes relatados en el listado anterior y proceder a su suma. Este sistema, basado en la contabilización directa,

exige cierto respaldo teórico para proceder a estimar los efectos indirectos de los cambios económicos derivados de la contienda, pero sigue un enfoque fundamentalmente contable. Alternativamente, se puede optar por la utilización de modelos econométricos agregados con los que estimar el impacto que los conflictos armados tienen dentro de un conjunto de variables cuyo efecto sobre el crecimiento económico está más o menos fundamentado teóricamente. Un tercer sistema se basa en la comparación de la evolución del país con la hipotética (por contrafactual) senda de crecimiento que habría seguido dicho país en ausencia de guerra, obtenida ésta por comparación con países similares, asumiendo que el país hubiera mantenido una tendencia similar a la existente con anterioridad al conflicto, etc.

Aunque en la literatura preocupada por estimar los determinantes del crecimiento, algunos trabajos, como el de Barro (1991), incorporan variables que recogen la existencia de conflictos civiles de mayor o menor grado, desde guerra civil a inestabilidad política, no se puede decir que abunden los trabajos que hayan intentado calibrar de forma específica el efecto que las guerras civiles tienen sobre los procesos de crecimiento.

Uno de los primeros y más citados trabajos sobre esta cuestión es el de Collier (1999), a partir de una muestra de 92 países, 19 de los cuales había sufrido una guerra civil. Según sus estimaciones, los países con conflictos civiles crecerían alrededor de 2,2 puntos por debajo de lo que habrían crecido en situación de paz, lo cual, para una duración media de 7 años de conflicto supone que al finalizar éste su PIB es un 15% más bajo (y su tasa de pobreza absoluta un 30% superior), mientras que la pérdida acumulada de renta equivaldría al 60% del PIB[19]. En esta misma línea Hoeffler y Reynal-Querol (2003) obtienen, utilizando una muestra ampliada a 211 países de los cuales 78 sufrieron alguna guerra durante el período 1960-99, un resultado similar: una caída en el crecimiento medio de 2,4%. Desde una aproximación distinta, basada en un modelo de crecimiento de corte neoclásico, Murdoch y Sandler (2002) estudian el efecto de las guerras civiles sobre el crecimiento, tanto a corto a como a largo plazo. Según sus cálculos, el efecto sería negativo e importante a corto plazo, pero no a largo plazo, resultado que interpretan en términos de que la guerra no afectaría a los factores fundamentales de crecimiento, de forma que tras la contienda el PIB sería inferior pero, de acuerdo con la tendencia a la convergencia esperable en los modelos neoclásicos de crecimiento, su tasa de crecimiento sería mayor, de forma que a largo plazo se recuperarían los niveles de renta, quedando inalterada la tasa de crecimiento de equilibrio en el largo plazo. La diferenciación entre corto y medio plazo es importante, ya que es la que permite contrastar si una vez recuperado el capital e infraestructuras destruido en la contienda el país o los países implicados sufren algún *handicap* añadido en su proceso de crecimiento[20].

---

[19] Estos resultados son cuestionados, en su magnitud, por Imai y Weinstein (2000), apéndice B, autores que con la misma metodología obtienen resultados sensiblemente inferiores.

[20] Organski y Kugler (1977) en un artículo dedicado al impacto de las dos grandes guerras sobre el poder de los Estados (medido éste mediante el PIB) defienden la hipótesis de ausencia de impacto en el largo plazo, conocida con el atractivo título de *Factor Phoenix*. Los autores argumentan que el impacto de las contiendas fue solamente temporal, ya que a largo plazo no afectó a la relación de poder entre los países implicados, independientemente de su posición como vencedores o vencidos: «Estamos tentados a sugerir que los resultados de la guerra, en lo que se refiere al poder internacional, no tienen efecto alguno», pág. 1365.

Utilizando una metodología distinta, basada en la comparación del crecimiento de los países en guerra con el crecimiento medio de las regiones en las que se sitúan, Stewart y FitzGerald (2001) obtienen unos resultados, recogidos en el **Cuadro 2**, que muestran efectos muy dispares entre países, con caídas muy significativas del PIB para Irak o Nicaragua, junto con pérdidas menos importantes en Uganda o Sudán. En todo caso, en la medida en que los conflictos civiles de un país afecten negativamente también a la región en la que se sitúan, este método tenderá a infravalorar el impacto de las guerras civiles sobre el crecimiento económico. En efecto, de acuerdo con las estimaciones de Collier *et al.* (2003), tener un conflicto en un país vecino reduce el crecimiento del país en alrededor de 0,5 puntos porcentuales. Este efecto se manifiesta por diversas vías, entre las que destaca la interrupción del comercio internacional, especialmente grave en el caso de países sin salida al mar, como Zimbabwe, país que durante la guerra de Mozambique se vio forzado a destacar combatientes para proteger el corredor ferroviario de Beira (Mozambique), su principal salida al mar y una de sus principales vías de exportación. Este conflicto también supuso que se duplicaran los costes de transporte de Malawi. De igual modo la llegada masiva de refugiados puede suponer un coste importante para los países limítrofes a las zonas de conflicto, tanto en términos económicos (aumento local de la inflación), como ecológicos, sociales y sanitarios. Los resultados obtenidos por Murdoch y Sandler (2002) también respaldan la existencia de un fuerte efecto contagio a los países limítrofes, tanto mayor cuanto mayor sea el número de bajas asociado al conflicto y su duración.

En todo caso, como señala Fearon (2004), estas estimaciones adolecen de varios problemas tanto de calidad de los datos utilizados, como de diversidad de las experiencias de desarrollo, que hace que las mismas deban ser tomadas con todas las cautelas. En cuanto a lo primero, muy posiblemente el análisis sufra de autoselección, en el sentido de que para los países más castigados por los conflictos, Somalia, por ejemplo, no se disponga de datos y por lo tanto queden automáticamente fuera del análisis o que, de incorporarse, se haga con unos datos de peor calidad que la ya de por sí baja calidad de los datos estadísticos de muchos de los países menos desarrollados. Todo ello nos lleva

Cuadro 2. *Pérdidas acumuladas de PIB en países en guerra.*

País	Pérdida acumulada de renta como % del PIB de 1995	País	Pérdida acumulada de renta como % del PIB de 1995
Angola	1,48	Sudán	0,5
Etiopía	3,95	Uganda	0,5
Liberia	1,56	El Salvador	5,67
Mozambique	2,83	Nicaragua	13,5
Sierra Leona	1,47	Irán	10,99
Somalia	1,72	Irak	48,06

Fuente: Stewart y FitzGerald (2001), pág. 7.

a pensar que muy probablemente los resultados subestimen el coste de la guerra en términos de crecimiento[21].

En segundo lugar, Fearon llama la atención sobre la distinta naturaleza de las guerras civiles y sobre el distinto momento en las que éstas se desatan en términos de la situación económica del país, distinguiendo tres tipologías: por un lado existen países en los que la guerra se da tras un proceso más o menos largo de recesión y caída del PIB, en segundo lugar estarían países para los que la guerra sería tan sólo un episodio que interrumpe temporalmente su proceso de crecimiento, por último tendríamos países para los que la guerra sería periférica a su actividad económica, no alterando de forma importante su trayectoria. En el **Gráfico 4** se recogen los casos de Liberia, Ruanda y Marruecos que sirven como ejemplos de tres tipos distintos de interrelación entre situación económica y guerra.

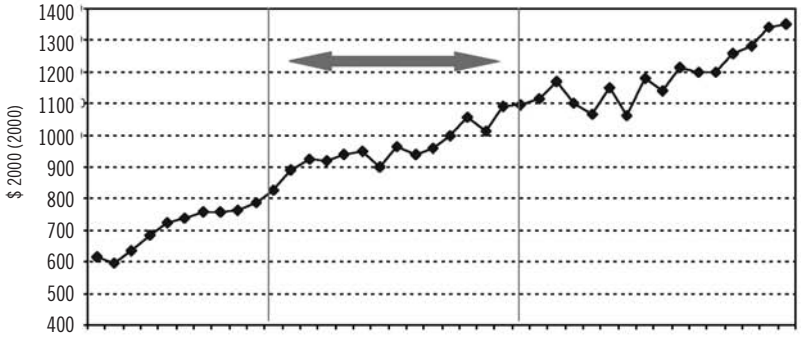
Pues bien, cuando se realizan análisis globales del impacto de la guerra en la economía de los países que la padecen, muy probablemente se esté agregando casos muy heterogéneos que en conjunto debiliten el efecto. En el caso I la guerra probablemente sea un elemento más del proceso de deterioro económico. En el caso II, si la guerra no afecta a las instituciones, no tiene por qué haber ningún problema para retomar la senda de crecimiento, una vez repuesto el capital destruido que, a mayores, será relativamente poco en países poco desarrollados y por lo tanto con pocas infraestructuras y dotación de capital (en especial en el caso de guerras poco intensivas en capital). Por último, las guerras periféricas probablemente afectarán de forma significativa a la región donde se desarrollen, pero no necesariamente al resto del país. Si la región afectada además es relativamente atrasada, su impacto agregado sobre la economía será poco significativo. Este planteamiento sería coherente con los resultados obtenidos por Stewart y FitzGerald (2001) referentes a la diversidad de impacto económico de las guerras según países.

La necesidad de plantear el análisis del efecto de la guerra sobre el crecimiento en un contexto que tenga en cuenta los diferentes tipos de países también es planteada por Koubi (2005), que defiende la conveniencia de estudiar la relación entre guerra y crecimiento económico *condicionada* no sólo a las características de los países en conflicto, *à la Fearon*, sino también a las características de la guerra, entendiendo por éstas el grado de destrucción –representado por el número de bajas–, la duración –recogido por el número de meses de contienda– y su intensidad –reflejada en el número de bajas por mes de guerra–. Cuando se investiga el peso de las variables que caracterizan la intensidad de la guerra (la muestra incluye guerras intra e inter-estatales) en una ecuación al uso de determinantes del crecimiento, todas las variables (en especificaciones distintas) aparecen como significativas y con signo negativo, aunque cuando se consideran sólo las guerras inter-estatales desaparece la significatividad estadística de la variable guerra, lo que indicaría que son las guerras civiles las que tienen un mayor impacto negativo sobre

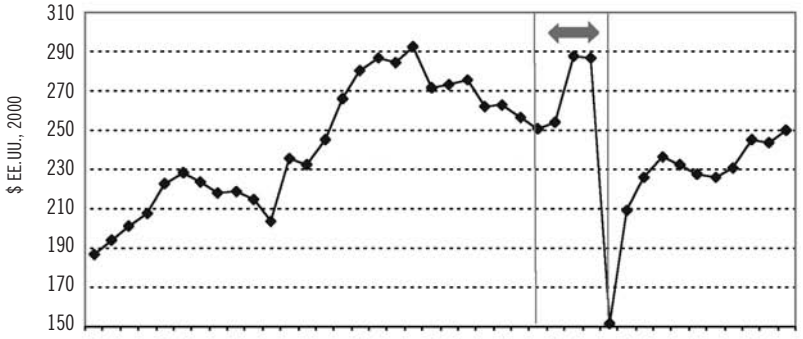
[21] Esta posición es compartida, por ejemplo, por Barro y Lee (1994), que tras estudiar el efecto de las guerras sobre el crecimiento económico a partir de una muestra amplia de países y obtener que el efecto de éstas sobre el crecimiento no es significativo, interpretan los resultados en términos de baja calidad de los datos.

Gráfico 4. *Tipos de relación entre situación económica y guerra*

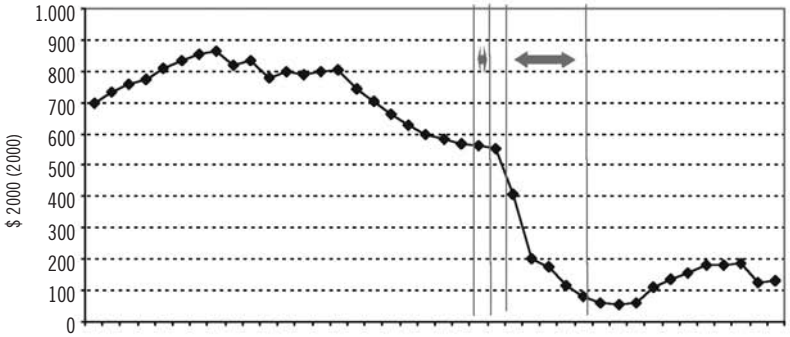
Evolución del PIB per cápita *en Marruecos: guerra «periférica».*



Evolución del PIB per cápita *en Ruanda: interrupción de la trayectoria.*



Evolución del PIB per cápita *en Liberia: el deterioro económico antecede al conflicto.*



Fuente: WDI (2006), Collier y Sambanis (2005) y elaboración propia.

el crecimiento. Sin embargo, cuando con la finalidad de identificar la causalidad[22] de la relación se analiza el impacto de haber sufrido una guerra en el período 1960-74 sobre el crecimiento en los 15 años siguientes (1975-89), el resultado cambia, ya que ahora el grado de destrucción aparece relacionado positivamente con el crecimiento futuro, lo que lleva al autor a defender que las guerras más destructivas conducirían, paradójicamente, a mayores tasas de crecimiento futuro.

En todo caso, e independientemente de la intensidad del efecto económico negativo de las guerras civiles sobre los procesos de desarrollo, se podría argumentar que quizá la guerra sea un mal necesario para acabar con una situación social insostenible para la población e inaugurar una nueva etapa de prosperidad económica, una posición en línea con los planteamientos de Olson (1982) y los resultados obtenidos por Koubi (2005) en lo que se refiere al crecimiento económico. Desafortunadamente, según los resultados obtenidos por Hoefler y Reynal-Querol (2003) a partir de datos de desempeño económico, democracia y libertades civiles, éste no parece ser el caso, ya que, salvo excepciones, las guerras civiles no suponen un cambio a mejor, sino un retroceso en la medida en que tras los conflictos las economías son más inestables, las políticas estructurales menos favorables al crecimiento, la política social menos inclusiva, el sector público funciona peor y se produce una caída en los índices de calidad democrática de las instituciones. Como señalan estas autoras, el «dividendo de la paz» está muy lejos de ser un dividendo automático tras la terminación de la contienda.

De los trabajos revisados en esta sección se obtiene una conclusión clara y varios interrogantes. La primera es el alto coste que los conflictos civiles tienen sobre la población y las economías de los países que las padecen. Aun teniendo en cuenta las fuertes diferencias existentes entre las estimaciones de tales costes para los (pocos) países para los que se ha estimado, el coste en términos de PIB es muy elevado, especialmente si tenemos en cuenta que nos referimos a economías poco desarrolladas con niveles de PIB *per capita* en muchos casos no muy superiores a los niveles de subsistencia.

Los resultados son también claros en lo que se refiere a su impacto negativo sobre el crecimiento económico a corto plazo, siendo éste tanto más intenso cuanto más larga e intensa es la contienda. En lo que se refiere al largo plazo, los resultados son diversos, e irían desde los que apoyan la tesis de la guerra como catarsis que facilita el cambio institucional, la renovación técnica y un mayor crecimiento en el largo plazo, a los que consideran que tales cambios, de producirse, rara vez son a mejor.

4. Los determinantes económicos de la violencia estructurada

La violencia estructurada incluye situaciones de ruptura de la paz social, o el *statu quo* social, de distinta intensidad que irían desde la existencia de continuas e intensas disrupciones violentas del normal funcionamiento de la sociedad (ya por parte de los

[22] La existencia de una relación negativa contemporánea entre guerra y crecimiento se puede interpretar tanto en términos de que los países con menor crecimiento son más proclives a sufrir conflictos armados, como en términos de que los países con guerras crecen menos.

agentes implicados en el objetivo de cambio social, ya por parte de las fuerzas policiales o militares responsables del mantenimiento del *statu quo*) hasta la guerra civil abierta. El conflicto social aparecería cuando dos o más grupos de la sociedad con diferentes objetivos y/o identidades se enfrentan a la hora de desarrollar una agenda mutuamente excluyente, por canales distintos a los normalmente establecidos para dilucidar este tipo de diferencias (parlamento, elecciones, etc.). Por utilizar dos ejemplos, la conflictividad social de Bolivia en 2005 en un extremo y Sri-Lanka en guerra civil abierta de 1975 a 2001 y en una cada vez más precaria situación de alto en fuego desde entonces, en otro, serían dos ejemplos de conflicto social de distinta intensidad. La conflictividad social, por lo tanto, forma un continuo que va desde la violencia política esporádica a la guerra abierta, ya entre países, ya dentro de un mismo país, y a su vez, ésta puede ser de muy distinta intensidad. Sin embargo, la mayor parte de la literatura sobre los determinantes económicos de los conflictos armados se ha centrado en el estudio de las guerras civiles, definidas según criterios no siempre homogéneos (Sambanis, 2004), con los inconvenientes que ello supone a la hora de comparar resultados entre distintas investigaciones. Ello se debe a dos razones: primero, como se ha visto en la sección 2, las guerras civiles conforman la mayor parte de las guerras de la segunda mitad del siglo XX (aunque en la época de la guerra fría fueran en muchos casos guerras por delegación de las potencias mundiales)[23]. En segundo lugar, porque a igualdad de intensidad es razonable pensar que los costes derivados de las guerras civiles son mayores; tanto psicológicos y de reconciliación (de lo que es un ejemplo la guerra civil española), como materiales, ya que la destrucción sufrida por ambos bandos recae en un mismo país.

Hasta hace relativamente poco el análisis de los factores determinantes de la conflictividad social era campo casi exclusivo de la Sociología y la Ciencia Política, donde el conflicto aparece como uno de los elementos centrales del cambio social. Por contra, la Economía, centrada en el mundo de los intercambios voluntarios poco tenía que decir sobre estas cuestiones. Esta situación, sin embargo, habría cambiado recientemente. La nueva literatura de los determinantes económicos del conflicto comparte dos características: en primer lugar, al igual que ocurrió anteriormente con el análisis económico del crimen (Becker, 1968), se aplica el principio de individualismo metodológico y el supuesto de *homo oeconomicus*, en el estudio de los conflictos civiles. En palabras de Grossman (1999), en las insurrecciones «los insurgentes no se distinguen de los bandi-

[23] De acuerdo con la definición de guerra interestatal del *Correlates of War Project* (dos o más naciones implicadas y 1.000 bajas militares en combate) entre 1982 y 1991 hubo cuatro guerras interestatales (Guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido, Guerra Chino-vietnamita y Guerra Sirio-israelí, en 1987, y la I Guerra del Golfo, 1990-91) y seis desde el final de la guerra fría (Armenia y Azerbaiyán, 1992-95; Etiopía y Eritrea, 1998-2000, Congo 1998-2000, Guerra de Kargil entre India y Pakistán, 1999, guerra de Afganistán, 2001, y II Guerra del Golfo, 2003-?). Sin embargo, el número de Disputas Interestatales Militarizadas (DIM) ha sido mucho más elevado, con una media de 31,5 disputas por año en el período 1992-2001, similar a la media de la segunda mitad del siglo XX (30), con lo que no se puede decir que el menor número de conflictos abiertos sea resultado de la reducción de la conflictividad interestatal, ya que en términos potenciales ésta sigue siendo alta. Como elemento positivo, parece que la intensidad de las disputas en la última década ha sido menor, en la medida en que en la última década han sido más frecuentes las demostraciones de fuerza que su uso (Goshn y Palmer, 2003).

dos o piratas» (pág. 269); su motivación sería así la maximización de su utilidad individual, y el cálculo económico de los costes y los beneficios derivados de una rebelión sería lo que en última instancia informaría las decisiones de aquéllos con capacidad para activar la guerra. En segundo lugar, este tipo de trabajos habitualmente cuenta con una vertiente empírica en la que se contrasta, fundamentalmente mediante técnicas econométricas, aunque más recientemente también mediante el análisis de casos, el peso que toda una amplia lista de variables tiene en las probabilidades de que un país se vea envuelto en una guerra civil. Esta estrategia permite delimitar las variables cruciales a la hora de explicar el estallido de guerras civiles, aunque ha sido criticada por la dependencia de los resultados obtenidos tanto de la especificación de los modelos, como de los criterios utilizados para definir un conflicto armado como «guerra civil», y de la calidad (escasa) de los datos (Sambanis, 2004).

Esta posición alternativa se recoge de forma clara en una inusual cita para un documento del Banco Mundial, el *World Development Report* de 2007, que se hace eco de las palabras de Trostky señalando que «la mera existencia de privaciones no es suficiente para provocar una insurrección; si así fuera, las masas estarían siempre rebelándose» (pág. 166). Basta con estar mínimamente familiarizado con la historia de la humanidad y las circunstancias que marcan la existencia de un porcentaje nada despreciable de población mundial (el 21% de la población de los países en desarrollo y el 46% de la población de los países del África subsahariana viven con ingresos inferiores al dólar diario[24]), para saber que no se rebelan quienes tienen motivos para ello, sino los que pueden. Por otra parte, la lucha por la supervivencia deja muy poco espacio para la rebelión (Popkin, 1979). La oportunidad y no la existencia de una causa cobraría así protagonismo como determinante alternativo de los conflictos armados.

Una lectura esquemática del comportamiento del *homo oeconomicus* nos diría que la motivación del conflicto estaría en el saqueo o acceso a riqueza y renta (el *greed* de la literatura anglosajona) mediante la conquista del Estado y el consiguiente control de los recursos públicos, incluyendo la ayuda al desarrollo. Alternativamente, desde una aproximación más amplia se puede pensar que son las injusticias o los agravios (*grievance*) los que estarán detrás de la activación de las guerras civiles. En todo caso, ya sea por *avaricia* o *agravio,* como le gusta señalar a la literatura sobre la materia, en ambos casos tendrán que cumplirse determinadas condiciones para que los conflictos civiles se puedan materializar y mantenerse activos a lo largo de los siete años que duran como media (Collier *et al.* 2003). En el **Cuadro 3** se recoge un esquema de este planteamiento que conformaría el modelo canónico del análisis económico de los conflictos civiles.

4.1 El papel de las desigualdades

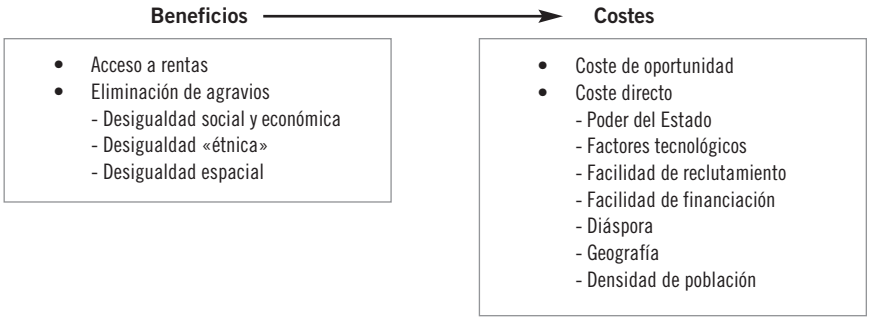
Las desigualdades, ya sea en términos de participación en la renta o en la propiedad de la tierra (variable muy relacionada con la distribución de la renta en los PMD donde la agricultura tiene un peso elevado en el PIB), y el acceso a los servicios públicos, por

[24] Estimaciones actualizadas por el Banco Mundial a diciembre de 2004.

razones de clase, grupo étnico o localización geográfica, son un claro factor a considerar cuando se analizan los elementos que podrían desencadenar conflictos civiles dentro de una comunidad desde la perspectiva de los agravios como fuente de violencia. Desde esta aproximación, la desigualdad podría sentar las bases de una futura rebelión y justificarla. Ésta es la conclusión a la que llega MacCulloch (2005) del análisis de corte transversal de datos de encuesta sobre preferencias por una revolución, según el cual cuando la desigualdad es alta el apoyo hipotético a una revolución es sensiblemente mayor. Algo especialmente probable si esa desigual distribución de la renta se da en un contexto de bajo o nulo crecimiento. Por otra parte, en la medida en que la desigualdad en la distribución de la renta genere inestabilidad sociopolítica, y puesto que es muy probable que ésta afecte negativamente a la inversión (Alesina y Perotti, 1996), la desigualdad influiría negativamente sobre el crecimiento económico (del que la inversión es uno de los motores principales), con lo que ambas variables se reforzarían.

La desigualdad como factor de conflicto social ha tenido, sin embargo, una presencia errática en la literatura teórica sobre las causas de la guerra civil. Así, como apunta Cramer (2001), la desigualdad ha pasado de ser un factor desincentivador de la rebelión, a ser un factor que podría estar en sus orígenes, para por último pasar a ser considerado un elemento irrelevante para explicar los conflictos civiles. En un primer trabajo sobre esta cuestión, Paul Collier, el principal exponente de lo que podemos denominar la Economía Política de las Guerras Civiles, defendía que «la mayor desigualdad reducía significativamente el riesgo y duración de la guerra» (Collier y Hoeffler, 1996, pág. 7), conclusión que fundamentaba en un modelo en el que la mayor desigualdad, y por lo tanto la existencia de una élite con fuertes intereses en el mantenimiento del *statu quo,* era interpretada por los posibles rebeldes en términos que, de desatarse el conflicto, el Gobierno podría contar con el apoyo de la élite, vía mayores impuestos, para mantener el esfuerzo bélico, lo que reduciría sus posibilidades de éxito, y por lo tanto las probabilidades de rebelión. Posteriormente, en un trabajo publicado en 1998, los mismos autores defendían que la desigualdad no tiene un efecto importante sobre el riesgo de conflicto social, posición que Collier mantiene en un trabajo publicado en 2000: «la des-

Cuadro 3. *Un modelo general de determinantes de conflictos civiles*



igualdad, ya sea de renta o de activos, no tiene efectos discernibles [sobre la probabilidad de conflicto civil]» (pág. 7), y que reafirma en Collier y Hoeffler (2000). Por el contrario, y de forma paradójica, una vez desatado el conflicto, su duración sí dependería, según estos autores, de la desigualdad: a más desigualdad mayor duración (Collier, Hoeffler y Söderbom, 2003).

Este resultado es cuestionado por Cramer (2001), que señala tanto la debilidad de las estadísticas sobre distribución de la renta disponibles, como los problemas derivados de utilizar medidas de distribución unidimensionales (ya sea de renta, ya de propiedad de la tierra) y fuera del contexto social específico de cada país. Así, por ejemplo, la tolerancia frente a la desigualdad es muy distinta si existe cierta movilidad social (el *efecto túnel* de Albert Hirschman), o si la movilidad es nula; también lo es en función de la ideología dominante (EEUU *versus* Europa), del grado de conocimiento de la misma, etc., lo que puede explicar que los mismos niveles de desigualdad arrojen niveles muy distintos de conflictividad. Por otra parte, como apunta Humphreys (2003), es muy posible que no sólo se estén utilizando datos de mala calidad, sino también indicadores incorrectos de desigualdad. Normalmente la desigualdad considerada en este tipo de análisis es de tipo vertical, entre individuos, y no de tipo horizontal, entre colectivos diferenciados, grupos étnicos o zonas geográficas. El caso de la rebelión zapatista en el Estado de Chiapas, en México, sería un ejemplo de la importancia de este último tipo de desigualdad. Abundando en este tipo de planteamiento, Azam y Koidou (2002) defienden que es precisamente la política de redistribución del Sur al Norte practicada por Félix Houphouët-Boigny, presidente de Costa de Marfil desde la independencia del país en 1960 hasta su muerte en 1993, lo que habría mantenido a este país al margen de los conflictos que han plagado África Occidental en los últimos tiempos[25].

En Collier y Sambanis (2005) se intenta dar cabida a algunas de estas críticas, desarrollando un modelo más amplio donde los agravios estén representados por un conjunto mayor de variables, desde la diversidad étnica y religiosa, hasta la democracia (los regímenes represivos pueden ser fuente de agravios), el tiempo transcurrido desde el último conflicto (existencia de heridas abiertas) y la desigualdad personal y de tenencia de la tierra. Los resultados arrojan una capacidad explicativa del modelo bastante baja (pseudos R^2 de 0,17 o más bajos), y no significatividad estadística de las variables de desigualdad. Sólo el grado de fraccionamiento étnico (de lo que hablaremos más adelante), el grado de democracia y el tiempo transcurrido desde el último conflicto aparecen como variables significativas. Esta última variable, por cierto, se interpreta no en

[25] Tras su muerte la situación de Costa de Marfil entró en un proceso de deterioro con todos los ingredientes de este tipo de situaciones en África: caída de los precios mundiales del principal producto de exportación (el cacao), presencia de un elevado porcentaje de población inmigrante de Burkina Faso (el 26%), desempleo urbano, los problemas de transición a la democracia de un país tras 33 años de gobierno personalista y varios intentos de golpes de Estado, que culminaron con el estallido de una guerra civil en 2002. En la actualidad el país se encuentra dividido *de facto* entre el Norte, controlado por las fuerzas rebeldes (Forces Nouvelles, FN), y el Sur, bajo control gubernamental, con tropas francesas y de la ECOMOG patrullando la zona de división.

términos de agravios pasados todavía vivos, sino en términos de la existencia de un capital de destrucción disponible.

Se puede decir que, a fecha de hoy, existe cierto consenso en la escasa importancia de la variable desigualdad para explicar la activación de las guerras civiles; como ejemplo de ello baste señalar que en un importante trabajo de Hegre y Sambanis (2006) sobre la sensibilidad de los análisis econométricos de los determinantes de las guerras civiles a las fuentes de datos utilizadas y a la especificación de los modelos, de las 88 variables consideradas (agrupadas en 18 categorías), ninguna se refería directamente a la distribución de la renta.

Como contrapunto a estos resultados, Nazfziger y Auvinen (1997), en su análisis de los determinantes de las emergencias humanitarias, concepto más amplio que el de guerras civiles que estudia Collier, concluyen que los altos niveles de desigualdad son uno de los factores que aumentan la vulnerabilidad de los países a las emergencias humanitarias. Estos mismos autores, en un documento posterior (2001), en el que hacen uso de estadísticas de distribución mejoradas, obtienen resultados más sólidos a propósito de la relación entre desigualdad y conflicto, incluso cuando la economía está creciendo, no sólo porque la distribución del crecimiento puede ser espacialmente desigual exacerbando los agravios de las regiones históricamente discriminadas, sino también porque el propio crecimiento puede crear expectativas que, de no cumplirse, deriven en conflicto abierto. Si ésta fuera la variable significativa, la desigualdad con respecto al grupo de referencia, el mismo grado de desigualdad observada podría generar agravios de distinta intensidad (y por lo tanto incentivar la rebelión en distinto grado) en función de cuál sea el grupo de referencia de la población en los estratos más bajos de renta o en las regiones más pobres, algo subjetivo y por lo tanto difícil de hacer operativo con los instrumentos y estadísticas al uso. Este planteamiento podría conducir a resultados paradójicos, como que un mayor grado de desigualdad generará un menor conflicto en la medida que esa mayor desigualdad fuera menos visible (Nagel, 1974).

Como conclusión, y aunque la literatura dominante parece haber descartado la desigualdad del elenco de factores explicativos de los conflictos, creo que debido tanto a las deficiencias de las estadísticas de desigualdad, como a la posibilidad de que sean otras formas de desigualdad (horizontal o entre grupos o zonas del país) las verdaderamente relevantes para explicar la activación de conflicto, es razonable pensar que el caso está todavía abierto, no pudiéndose por ello descartar esta variable del elenco de determinantes del conflicto. Un ejemplo de ello lo aporta BeaÇon (2005), que tras analizar los determinantes de la violencia (incluyendo distintas intensidades y tipos) obtiene que la desigualdad es un factor que claramente contribuye a la activación de las rebeliones, mientras que tiene un peso menor en los conflictos étnicos, en los que paradójicamente la mayor igualdad de renta puede contribuir a la aparición de conflictos siempre que no se habiliten canales para la eliminación de otras desigualdades vigentes que garanticen la inclusión de todos los grupos en las instituciones de gobierno. Por último, la desigualdad no sería significativa a la hora de explicar los genocidios. En todo caso, la desigualdad sería un factor que contribuyendo al conflicto, no lo explicaría, ya que harían falta que se

cumplieran otras muchas condiciones para que éste se activara, entre ellas la posibilidad de organizar a los descontentos (Mueller *et al.* 1985) y movilizar los recursos mínimos para poner en marcha el conflicto.

4.2 Nivel de renta y guerra civil

El nivel de renta es la segunda variable a considerar en este repaso de los determinantes de la guerra civil. En este caso, la relación es mucho menos polémica, ya que todos los estudios (Nafzinger y Auvinen, 1997 y 2001, Collier y Hoeffler, 2004 o Hegre y Sambanis, 2006, por ejemplo) apuntan a que cuanto mayor es el PIB *per capita* de un país, menor es su probabilidad de verse envuelto en una guerra civil. Más aún, el impacto de la renta *per capita* sobre la probabilidad de activación de una guerra civil es muy significativo: a partir de la explotación de Humphreys (2003) de las estimaciones de Collier y Hoeffler (2002), un país con una renta *per capita* de 250$ tiene el doble de probabilidades de verse envuelto en una guerra civil que otro con una renta de 600$, y la probabilidad se reduce a la mitad de ésta si su renta es de 1.250$. Esta relación, sin embargo, puede obedecer a muchos factores, no habiéndose explorado totalmente cuáles de ellos son los principales responsables de la misma. Así, los primeros trabajos (Collier y Hoeffler, 1998) interpretaron esta relación en términos de que cuanto mayor es la renta, mayor es también el coste de oportunidad de la rebelión. Este planteamiento, que puede ser válido en sociedades con bajos niveles de desigualdad donde, por lo tanto, todo el mundo tiene algo que perder, ya sea mucho o poco, no lo sería tanto en presencia de una distribución muy desigual de la renta y por lo tanto con un grupo suficientemente numeroso y pobre cuyo coste de oportunidad sería prácticamente nulo. Una formulación posterior de esta relación por parte de estos autores (Collier, Hoeffler Rohner, 2006) replantea la misma en términos del efecto del crecimiento sobre la demanda de trabajo, y la mayor dificultad de reclutar a soldados por parte de los grupos rebeldes en situaciones de crecimiento de la demanda de trabajo. Por el contrario, en situación de crisis, incorporarse a una rebelión puede ser una opción más atractiva (planteamiento este que, sin embargo, no sería aplicable a las guerrillas que basan su operación en el reclutamiento forzoso). También es posible que la causación sea la inversa, esto es, que los países ricos lo fueran por haberse visto libres de conflicto en el pasado.

Por otra parte, el estancamiento económico puede forzar a las élites gobernantes a aumentar su tasa de depredación económica so pena de que se rompan las coaliciones y apoyos que les permiten mantenerse en el poder, lo que a su vez puede provocar revueltas y conflictividad social que, en el más que probable caso de que se intenten atajar mediante la represión violenta, podrían sentar las bases para una escalada del conflicto. En palabras de Nafzinger y Auvinen (2001): «el crecimiento negativo de la renta per cápita interactúa con la depredación política en una espiral negativa, como atestiguan países como Angola, Etiopía, Sudán, Somalia, Liberia, Sierra Leona y Zaire (Congo)» (pág. 7). Alternativamente, Fearon y Laitlin (2002) defienden que la relación negativa entre renta *per capita* y conflictos civiles se explicaría por la mayor capacidad administrativa, militar y de mantenimiento de orden público de los países con rentas más elevadas, así

como sus mejores comunicaciones y mayor presencia de las instituciones del Estado en todo su territorio. Por último, puede que no se hayan considerado todas las variables determinantes del conflicto y que la relación entre PIB y guerra civil sea espuria. En todo caso, este resultado indica que aquellas políticas que generen crecimiento también contribuirán a alejar el peligro de conflicto. Como cautela hay que señalar que en el caso de que el crecimiento se concentrara en algunas regiones y generara el empobrecimiento relativo o absoluto de otras, su efecto podría verse compensado por el impacto negativo potencial del aumento de la desigualdad. Este resultado indica que una estrategia de reducción de la probabilidad de conflicto sería concentrar los esfuerzos de desarrollo en aquellos países de menor renta (a los que parece dirigirse la reciente estrategia de condonación de deuda promovida por el G8 a instancias de Tony Blair). Si esta interpretación fuera correcta, la lucha contra la desigualdad externa –de ámbito mundial– sería así una estrategia de prevención de conflictos. En esta línea, los trabajos de Anyanwu (2002) o de Collier y Hoeffler (2002) indican que la alta presencia de conflictos bélicos en África, su desgraciada especificidad en esta área, estaría relacionada por encima de otros factores, con su comportamiento económico especialmente negativo en las últimas décadas: la economía africana, con un crecimiento del PIB *per capita* entre 1973 y 1998 de 0,01, estuvo prácticamente estancada durante el último cuarto del siglo pasado, en contraste con el período anterior, 1950-73, en donde tuvo un crecimiento del 2.07%[26]. África, especialmente al sur del Sahara, también sobresale por acumular el mayor índice de Estados fallidos de los cinco continentes[27].

4.3 La diversidad etnolingüística como fuente de conflicto

Otro factor tradicionalmente considerado en los análisis de las causas de la guerra civil es la diversidad etnolingüística del país. En lo que a esto respecta, y a modo de cautela, lo primero que hay que señalar es que parece haber consenso en que las identidades étnicas son construcciones sociales, altamente maleables (Chandra, 2001), y no categorías inmutables y objetivas que se puedan definir al margen del contexto social e histórico en el que se encuadran. Esa maleabilidad del propio concepto de etnia o grupo como algo diferenciador «del otro», hace difícil, en presencia de correlación entre diversidad etnolingüística y conflicto civil, desentrañar si la causalidad va de ésta a aquél, o viceversa. Numerosos estudios de caso han confirmado que la diversidad étnica es utilizada frecuentemente de forma oportunista por las partes implicadas en los conflictos civiles para justificarlos y aumentar su magnitud e intensidad, sin que ello signifique que tal diferencia estuviera necesariamente en el origen del conflicto, que se explicaría por otros factores. Estas dificultades obviamente se reflejan en la construcción de los índices de diversidad étnica, y por lo tanto deben ser tenidas en cuenta a la hora de eva-

[26] Maddison (2001), pág. 126.

[27] Meredith (2005) proporciona un excelente relato del fracaso de los Estados creados tras la descolonización en África. Un excelente análisis teórico de los factores que propiciaron dicho fracaso también se puede encontrar en Herbs (2000).

luar los resultados[28]. No es así de extrañar que exista diversidad de opiniones relativas a las implicaciones económicas de la existencia de diversidad etnolingüística y su papel en la génesis de los conflictos civiles. Easterly y Levine (1997) defienden que la diversidad etnolingüística, medida como la probabilidad de que dos individuos de un mismo país elegidos de forma aleatoria pertenezcan a grupos etnolingüísticos distintos, es un factor importante a la hora de explicar la tasa de crecimiento del país: pasar de homogeneidad absoluta a heterogeneneidad máxima implica una pérdida de crecimiento de 2,3 puntos porcentuales, pero no encuentran relación entre esta variable y la inestabilidad política. Por su parte, Collier y Hoeffler (1998) consideran que la relación entre ambas variables no es lineal, sino de tipo cuadrático, de forma que la probabilidad de conflicto sería baja tanto para aquellos países homogéneos como para aquellos otros con un alto nivel de diversidad etnolingüista, mientras que sería más elevada para aquéllos con un grado intermedio de fragmentación. En un índice de 1 a 100, donde el valor máximo significa que cada individuo pertenece a un grupo etnolingüístico distinto, el riesgo máximo de conflicto se alcanzaría según estos autores para un valor de 38, que estaría asociado, por ejemplo, con una situación en la que hubiera dos grupos distintos de tamaño similar. Las sociedades polarizadas tendrían según sus estimaciones una probabilidad de guerra civil un 50% mayor que las sociedades o muy fragmentadas o muy homogéneas, un resultado que los autores achacan a las dificultades de coordinación existentes en sociedades muy fragmentadas. Otros trabajos posteriores (Collier y Sambanis, 2005[29], Hegre y Sambanis, 2006[30] o Fearon y Laitlin, 2002) confirmarían esta posición. De ahí el interés que tiene profundizar en el conocimiento de las razones que explican que las coaliciones políticas y las relaciones de clientelismo se organicen en clave étnica en unos países más que en otros (Fearon, 2004b).

Otros autores (Reynal-Querol, 2002), utilizando índices de polarización resaltan, para el subconjunto de guerras civiles étnicas (por contraposición a las guerras ideológicas o revolucionarias), la importancia que tienen las divisiones de tipo religioso (por encima de la étnicas) en la explicación del conflicto civil, aunque su efecto final depende en gran medida del tipo de instituciones políticas existentes en el país. El último trabajo de Collier, Hoeffler y Ronher (2006), con una nueva base de datos ampliada a 208 países y 84 guerras civiles, sitúa de nuevo a estos autores en la órbita de los defensores de la existencia de una relación directa entre lo que los autores denominan «fragmentación social» (el producto del índice de fraccionamiento étnico y el índice de fragmentación religiosas) y el riesgo de conflicto: multiplicar por dos el índice de fragmentación social aumenta el riesgo de conflicto del 4,7 al 7%. Este cambio es especialmente relevante para los países del África subsahariana con un alto índice de diversidad étnica.

---

[28] Un análisis de los problemas asociados a la utilización del concepto de etnicidad y su traducción a índices de diversidad o fragmentación étnica se puede encontrar en Green (2004). Sobre la correlación entre distintos índices véase Alesina *et al.*, (2003).

[29] De las cuatro variables de tensión étnica y religiosa (fraccionamiento religioso y étnico, polarización étnica y dominancia) incorporadas en un estudio de determinantes de la guerra civil a partir de una muestra de 850 observaciones años/países, con 59 guerras, sólo la primera de las variables es estadísticamente significativa al 10%.

[30] En este caso, la fragmentación étnica aparece asociada a conflictos armados de baja intensidad.

En todo caso, el grado de diversidad étnica sí tendría efecto, como ocurriera con la desigualdad, en la duración de los conflictos. Según Collier, Hoeffler y Söderbom (2004) cuando las guerras tienen lugar en sociedades moderadamente fragmentadas (en términos étnicos), esto es, con valores alrededor de 50 en una escala de 0 a 100 (lo que equivaldría a un país con dos o tres grupos étnicos grandes) duran más, en comparación con sociedades con índices mayores o menores. Una posible interpretación es que la existencia de un número reducido de grupos aumenta la cohesión de las fuerzas rebeldes (el caso extremo serían sólo dos: el Gobierno y los rebeldes). Fearon (2004c) obtiene también una relación positiva entre fragmentación étnica y duración de los conflictos civiles, que sin embargo asocia al recurso a la guerra de guerrillas en las confrontaciones étnicas y a la mayor duración de las guerras caracterizadas por este tipo de tácticas frente a las asociadas con enfrentamientos entre dos ejércitos regulares. La asociación entre la división en función de etnias y lo que el autor llama las «guerras de los hijos de la tierra», que tendrían su origen en conflictos entre población agrícola local e inmigrantes (a menudo con apoyo gubernamental) por el uso de la tierra, y con una dinámica que haría difícil alcanzar acuerdos entre las partes implicadas, explicaría también esa correlación entre etnia y duración de los conflictos armados.

Independientemente de la existencia o no de una relación directa entre diversidad étnica y conflicto, la diversidad o fraccionamiento etnolingüístico y religioso puede tener un efecto indirecto negativo sobre la probabilidad de guerra civil mediante el impacto negativo que la mayor parte de trabajos que se han ocupado del tema han encontrado entre comportamiento económico y diversidad étnica (Easterly y Levine, 1997, Alesina *et al.*, 2003 o Montalvo y Reynal-Querol, 2005)[31]. El menor crecimiento del PIB en sociedades con alta diversidad étnica incidiría por la vía de un menor PIB *per capita* en una mayor probabilidad de conflicto. En todo caso, es importante señalar que ese efecto negativo se puede aminorar de forma significativa en presencia de instituciones efectivas de resolución de conflictos y sistemas políticos participativos que fomenten la inclusión. De hecho, el efecto negativo de la educación sobre la probabilidad de conflicto que se obtiene en gran parte de la literatura (por ejemplo en Collier, Hoeffler y Sambanis, 2005) se puede interpretar tanto en términos de mayor coste de oportunidad de la guerra cuanta más educación tiene la población, como en términos de la educación como mecanismo de crear identidades comunes por encima de las étnicas y socialización en términos de nación y no de etnia.

A modo de conclusión podemos decir que el análisis de la relación entre fragmentación étnica y riesgo de guerra civil, al igual que ocurriera con la desigualdad, refleja la dificultad de obtener resultados claros en lo que se refiere a un tema con múltiples ver-

[31] Por ejemplo, según Alesina *et al.*, 2003, pág. 166, pasar de la homogeneidad máxima a la diversidad extrema reduciría el crecimiento en 1,9 puntos porcentuales. Cuando se toma como referencia la diversidad religiosa, sin embargo, no se observa efecto alguno sobre el crecimiento. En todo caso los autores señalan la necesidad de ser cautelosos a la hora de evaluar la intensidad de la relación entre ambas variables dado el alto grado de correlación entre la fragmentación étnica y otras variables (como las geográficas, por ejemplo) con fuerte incidencia sobre el crecimiento.

tientes y difícil de contrastar. A las dificultades de definir qué es una etnia, se le suman las dificultades de trasladar dicha definición a un índice cuya relación con otras variables (como la guerra civil) sea susceptible de contrastación, en un contexto de fuerte autocorrelación entre fragmentación étnica y otras variables como tipo de terreno o crecimiento económico, con efecto sobre la tasa de ignición de conflictos. No es de extrañar que los resultados cambien al ritmo que lo hacen las bases de datos utilizadas, los indicadores de fragmentación y las especificaciones de los modelos. En todo caso, sabemos que la diferencia étnica, sea o no causa de guerras civiles, se utiliza como un elemento de movilización una vez desatadas éstas.

4.4. Recursos naturales y guerra civil

El penúltimo factor a considerar en este repaso de las causas económicas de los conflictos civiles es la existencia de recursos naturales como incentivo a la rebelión. Desde un punto de vista teórico esta variable afectaría positivamente a la probabilidad de conflicto por tres vías complementarias: por un lado, permitiendo a los rebeldes financiarse durante el conflicto (el caso de UNITA en Angola y el comercio de diamantes), por otro, haciendo más atractiva la rebelión, ya que de triunfar se tendría acceso a una fuente de recursos fácilmente explotable por los vencedores. Estos dos mecanismos explicarían que para el análisis económico, donde la avaricia y el análisis coste-beneficio son el factor determinante del comportamiento humano, esta variable sea considerada como determinante a la hora de explicar el estallido de las guerras civiles. La tercera vía de conexión estaría relacionada con la menor presencia de las instituciones gubernamentales en las zonas remotas de aquellos países que basan su viabilidad económica en la explotación de recursos naturales, ya sean minerales o petróleo, normalmente concentrados en zonas concretas del país. El acceso a una fuente segura y abundante de ingresos conduciría según esta hipótesis a una menor implantación administrativa en las zonas económicamente menos útiles para el gobierno y facilitaría la rebelión.

En un primer momento (Collier y Hoeffler, 1998), los resultados obtenidos parecían confirmar la relación entre ambas variables (aunque sin entrar a analizar el mecanismo concreto de transmisión): «el aumento de la dependencia de las exportaciones de recursos naturales aumenta el riesgo de conflicto, al menos hasta superar el nivel del 27% del PIB» (pág. 568). Con el paso del tiempo, los autores ampliaron el punto de inflexión de la relación cuadrática, hasta el 35% (Collier y Hoeffler, 2002b), y plantearon algunas dudas sobre el mantenimiento del peso de los recursos naturales como causa de los conflictos civiles en las guerras de secesión (Collier *et al.*, 2003) al señalar que si bien la existencia de recursos naturales en muchos conflictos de secesión hace que no se pueda descartar el motivo de acceso a los mismos como factor desencadenante del conflicto, «no parece que ésta sea una fuerza tan poderosa como los economistas habían asumido» (pág. 64). En todo caso, tanto en Collier, Hoeffler y Sambanis (2005) como en Collier, Hoeffler y Rohn (2006), estos autores se reafirman en el peso que las exportaciones de bienes primarios con respecto al PIB, X_{BP}/PIB (la manera de hacer contrastable la hipótesis) tienen sobre la probabilidad de desencadenamiento de una guerra civil, en

ambos casos positiva aunque en una formulación cuadrática de forma que la misma tendría el perfil de una U invertida, con un máximo de riesgo de conflicto para un valor de X_{BP}/PIB del 32% (Collier, Hoeffler y Sambanis 2005, pág. 9).

En contraste, Fearon (2005) critica la falta de robustez de los resultados alcanzados por estos autores, en la medida en que pequeños cambios en la muestra o en los mecanismos de solucionar el problema de datos ausentes alteran los resultados obtenidos. En su opinión tal relación existe tan sólo para los países productores de petróleo (y en la medida en que el petróleo forma parte de las exportaciones de bienes primarios se refleja en esta variable) y se explicaría no por su efecto sobre la capacidad de alzarse en armas de los grupos rebeldes, sino por la paradójica baja capacidad estatal que presentan estos países (la explicación más favorecida desde la ciencia política).

El papel atribuido a la dependencia de la explotación de recursos naturales en el desencadenamiento y mantenimiento de conflictos civiles de distinta intensidad ha generado toda una serie de trabajos que exploran las características de esa relación, diferenciando entre tipos de recursos naturales y profundizando en los mecanismos de transmisión. Un ejemplo de este tipo de enfoque es el trabajo de Ross (2002) en donde, a partir del estudio de 15 casos de países con recursos naturales y conflictos civiles, obtiene las siguientes conclusiones: (1) los recursos naturales tienen efectos muy distintos según el tipo de conflicto y la naturaleza del recurso, (2) los recursos fácilmente expoliables (susceptibles de explotación sin maquinaria pesada y trabajo cualificado, como la minería de diamantes de aluvión o las drogas) se asocian a la activación de conflictos no separatistas, mientras que los recursos no expoliables –como el petróleo o la explotación de minerales en profundidad– están asociados a conflictos separatistas, (3) los recursos no expoliables tienden a favorecer al Gobierno, ofreciéndole una fuente segura de ingresos, (4) una vez activados, los conflictos relacionados con la existencia de recursos naturales expoliables suelen ser más difíciles de solucionar, mientras que la existencia de recursos no expoliables suele acortar los conflictos, al aumentar el poder militar del lado de la facción que los controle, normalmente el Gobierno. Esta última conclusión es cuestionada por Humphreys (2005), quien defiende que las guerras en las que hay implicadas la explotación de recursos naturales son más cortas (independientemente del tipo de éstos) y tienden a terminar con una clara victoria militar por parte de uno de los contendientes. Asimismo Humphreys defiende que la activación de un conflicto depende más de la importancia que la explotación de los recursos naturales haya tenido en el pasado que de su importancia futura potencial, lo que interpreta en términos de un respaldo parcial a la hipótesis de estado débilmente implantado.

En esta misma línea Le Billon (2001) distingue entre recursos próximos a la capital, y por lo tanto fáciles de controlar por el Gobierno y el aparato estatal, recursos distantes de ésta y al alcance de los grupos rebeldes potenciales, recursos altamente concentrados en un lugar y recursos dispersos y por zonas geográficas extensas, dando lugar a cuatro categorías de recursos donde los concentrados y cercanos a la capital incentivarían los golpes de Estado; los concentrados y lejanos de la capital, las guerras separatistas; los difusos y cercanos a la capital, las rebeliones y revueltas; y los lejanos y dispersos, la creación de feudos de señores de la guerra (*warlordism*).

En conjunto, asistimos a una segunda generación (Ron, 2005) de trabajos sobre la relación entre recursos naturales y conflicto, que da mayor importancia al efecto de los mismos sobre las características de los Estados que se benefician de su explotación (hipótesis del Estado débil), diferenciando entre el tipo de recurso natural y el tipo de conflicto. En algunos casos, el análisis se lleva al estudio del efecto sobre los propios movimientos rebeldes, como en el caso del trabajo de Weinstein (2005), para quien los movimientos rebeldes que se financian a través de la explotación de recursos naturales también pueden sufrir de la maldición de los recursos al atraer a sus filas soldados poco motivados por los objetivos últimos de la rebelión y, por lo tanto, poco fiables en situaciones difíciles.

Centrada en el análisis de los recursos naturales de exportación, la literatura ha tratado con menos detalle el peso de la sobreexplotación de recursos y el aumento de la presión sobre los recursos naturales en la activación de conflictos ya sean intraestatales (como la violencia entre ganaderos y agricultores) o interestatales. Robert Kaplan (1994) señala que «África occidental se está convirtiendo en el símbolo de presión demográfica, medioambiental y social, con implicaciones potenciales futuras en términos de anarquía y desaparición de estados nacionales» (pág. 46); otros autores, como Homer-Dixon (1994), argumentan que el aumento de presión sobre el medio ambiente derivado del incremento de población puede provocar un aumento de la violencia (especialmente en países menos desarrollados con actividades productivas más dependientes de los recursos naturales): «nuestro trabajo muestra que la escasez de recursos ya está contribuyendo a la aparición de conflictos violentos en muchas partes del Mundo en desarrollo. Probablemente estos conflictos son señales tempranas de un aumento de la violencia inducida o agravada por la escasez en las próximas décadas. Normalmente la violencia será sub-nacional, persistente y difusa» (pág. 5). Este planteamiento neomalthusiano es contrastado por Urdal (2005) para una muestra amplia de países durante el período 1950-2000, rechazándose todas las hipótesis planteadas, esto es, ni la tasa de crecimiento de la población, ni la tasa de densidad –con respecto a la tierra de uso agrícola potencial–, ni su efecto combinado, ni el crecimiento de la población urbana, están asociados de forma robusta con un aumento de los conflictos armados. Sólo para la década de los setenta el efecto de la interacción entre crecimiento de la población y escasez de tierras sobre los conflictos armados es positivo y estadísticamente significativo, lo que explicaría la primera ola de escritos neomalthusianos acontecida tras la primera crisis del petróleo, pero no la segunda ola producida tras el fin de la guerra fría. Otros trabajos, como el de De Soysa (2002), confirman esos resultados al indicar la ausencia de relación entre escasez de recursos renovables y conflicto. Una posible explicación de esta dinámica sería, en línea con la hipótesis de E. Boserup (1910-1999) (1965), que el aumento de la presión sobre los recursos naturales incentivaría la puesta en marcha de estrategias de supervivencia y cambio técnico donde éstos tuvieran una menor importancia. Más aún, como planteaba Julian Simon (1932-98), el máximo crítico de las visiones neomalthusianas, en un artículo con el inquietante título de «Lebensraum» (el espacio vital de la ideología nazi), la presión de la población sobre el medio puede activar el desarrollo de nuevas formas de producción que deriven en un aumento del crecimiento basado en recur-

sos alternativos y que, en última instancia, genere un aumento de la disponibilidad efectiva de los recursos otrora escasos (Simon, 1989). Como cautela señalar que esta posición optimista se fundamenta en la existencia de plena sustituibilidad entre factores, y que en ausencia de ésta podrían muy bien alcanzarse situaciones donde el recurso al cambio tecnológico no sirviera para solventar la escasez y por lo tanto el conflicto potencial.

4.5. Otros factores: población, geografía, sistema político

Junto con los factores tratados más arriba existen otros elementos, de naturaleza demográfica o geográfica, que pueden afectar a la facilidad o dificultad con la que un Gobierno puede hacer frente a una rebelión, o un grupo rebelde enfrentarse al poder estatal. La morfología y naturaleza de la geografía del país es uno de esos elementos: países montañosos (como lo son partes de Afganistán)[32] o de bosques densos (como los bosques húmedos tropicales) proporcionan lugares seguros a los combatientes rebeldes y por lo tanto pueden contribuir al estallido de los conflictos armados y a su alargamiento en el tiempo. Por otro lado, territorios amplios con una baja densidad de población pueden dificultar la acción de gobierno (incluyendo la acción militar). Herbs (2000) habla de países con geografías complejas que hacen difícil la consolidación del poder estatal, refiriéndose a países de gran extensión, con zonas de gran densidad de población, no contiguas y en muchos casos ni siquiera cercanas unas de otras: «Población diseminada en un estado grande supone automáticamente un reto físico a la extensión de la autoridad estatal sobre un porcentaje elevado de la población» (pág. 146). El ejemplo paradigmático de este tipo de países con una geografía adversa para la consolidación del poder estatal sería la República Democrática del Congo. Con 2,2 millones de kilómetros cuadrados (el segundo país africano en extensión tras Sudán con 2,3), una gran concentración de población alrededor de Kinshasa, y otra serie de grandes núcleos de población muy distantes de la capital (uno de ellos a más de 1.300 kilómetros), dejando entre medias extensas zonas prácticamente vacías[33]. Estas características no sólo suponen un reto para el ejercicio efectivo del poder estatal, sino que han dado lugar a un fuerte grado de diversidad etnolingüística, con sus potenciales efectos negativos sobre el grado de conflictividad social.

El tamaño de la población es otra variable a tener en cuenta a la hora de estudiar la probabilidad de conflicto. La primera razón para ello obedece al hecho de que el límite de bajas incorporado para considerar un conflicto bélico como guerra civil (mil) será más fácil de alcanzar en países grandes que pequeños. Pero más allá de esta razón, es razonable pensar que el reclutamiento será más fácil para los rebeldes, en presencia de po-

[32] Según los resultados alcanzados por Fearon y Laitlin (2002), un país con la mitad de su territorio montañoso tiene una probabilidad de sufrir un conflicto civil a lo largo de una década el doble que otro, a todas luces igual, pero sin montañas (pág. 24).

[33] En la lista de naciones africanas con geografía adversa para la consolidación del poder estatal están: Angola, R. D. Congo, Etiopía, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudán y Tanzania. Nótese cómo todos los países, excepto Namibia, han sufrido contiendas civiles, mientras que Namibia ha sufrido una guerra de liberación, protagonizada por el South West African People's Organisation, SWAPO.

blaciones elevadas. Una población numerosa también puede aumentar la presión sobre los recursos naturales generando ocasiones para el conflicto. Otro elemento demográfico a considerar, aunque de distinta naturaleza, es la existencia de diáspora, o un volumen importante de población en el exterior, que puede actuar como fuente importante de financiación de los movimientos rebeldes: en el ámbito europeo son conocidas las campañas de «fundraising» que periódicamente realizaba el Sinn Fein entre la población de origen irlandés asentada en EEUU[34]. Entre el 80 y 90% de la financiación del LTTE (Liberation Tigres of Tamil Elan), el grupo separatista que desde 1983 protagoniza una guerra en el norte y noreste de Sri Lanka, proviene del exterior, tanto de aportaciones, no siempre voluntarias, de la diáspora tamil (en 2001 se estimaba que una cuarta parte de la población total tamil de Sri Lanka vivía en el exterior), como de inversiones y empresas (Human Right Watch, 2006). En la medida en que el bajo nivel de renta y la falta de perspectivas económicas contribuyan a la diáspora, tendríamos una nueva vía de conexión entre bajo crecimiento y riesgo de conflicto.

El último elemento a considerar es de qué forma el tipo de organización política imperante puede contribuir en la activación o neutralización de conflicto. ¿Están las democracias mejor preparadas para neutralizar las tensiones que pueden derivar en enfrentamientos civiles? ¿O acaso los Gobiernos totalitarios, con su potencialmente mayor capacidad de control de la población, y menores restricciones legales, están mejor preparados para neutralizar rebeliones? En la medida en que los sistemas democráticos tienen establecidos canales de participación de los individuos y grupos en las instituciones de gobierno, en principio tendría sentido pensar que las democracias son mejores sistemas de resolución de conflictos que las autocracias, y por lo tanto menos proclives al conflicto civil violento. En lo que a esto respecta, los resultados también son divergentes. Por ejemplo, de acuerdo con Fearon y Laitlin (2002), cuando se controla por nivel de renta las guerras civiles no son menos frecuentes en democracias que en países con otro tipo de sistema político. Mientras, Collier, Hoefler y Sambanis (2005) obtienen que la democracia es una variable significativa con un peso negativo sobre la probabilidad de guerra civil.

Otros autores (por ejemplo, Reynal-Querol, 2002 o Mueller y Weede, 1990) han investigado la posibilidad de que la relación entre tipo de régimen político y probabilidad de guerra civil sea de tipo U invertida, de forma que tanto los regímenes autoritarios como las democracias maduras y plenamente desarrolladas tengan menor riesgo de conflicto civil, los primeros por su mayor capacidad represiva y los últimos por sus mejores sistemas de resolución de conflictos. Para Reynal-Querol, 2005, la democracia no sería suficiente para frenar los conflicto civiles, siendo central el grado de «inclusión» del sistema político (definida como las características de este que evitan la exclusión de ciudadanos del mismo). De acuerdo con el análisis de la autora, los sistemas de representación proporcional generarían un alto nivel de inclusión mientras que en el extremo opuesto estarían los sistemas mayoritarios y presidencialistas.

[34] «US calls halt to Sinn Fein fundraising in IRA backlash», *The Times,* March 14, 2005.

En todo caso, de acuerdo con Lacina (2006), el grado de democracia influye de manera significativa (más que el nivel de desarrollo económico o el poder militar) en la intensidad –medida según el número de bajas en combate– de las guerras civiles.

5. Recapitulación y conclusiones

Como se puede apreciar del análisis desarrollado hasta el momento, la economía política de las guerras civiles es una materia en proceso de construcción, de forma que al día de hoy no se dispone de un cuerpo teórico definitivo sobre los determinantes de los conflictos civiles. De hecho, el avance de nuestro conocimiento sobre la materia no ha hecho sino arrojar dudas sobre las certidumbres que en el pasado se tenían al respecto. A pesar de ello, y a modo de resumen, se puede decir que un contexto económico de estancamiento o recesión económica, el fracaso del Estado en el cumplimiento de sus funciones, la utilización patrimonialista de sus recursos y la existencia de fuentes fácilmente apropiables de rentas, aparecen como factores importantes a la hora de determinar el riesgo de estallido de guerra civil y su duración. Por contra, la diversidad etnolingüística y la desigualdad aparecen con menor peso como factores de activación del conflicto, aunque el grado de desigualdad afectaría positivamente al alargamiento del mismo. Por otra parte en la medida en que una mayor desigualdad y diversidad etnolingüística afecte negativamente al crecimiento económico, ambas variables, indirectamente, contribuirían al aumento del riesgo de guerra civil. También hay razones para pensar que son las desigualdades horizontales, entre grupos o zonas geográficas, y no verticales –entre individuos– las que estarían detrás de la activación de conflictos civiles. Junto a estas variables se confirma la importancia de otras de tipo «tecnológico», como la geografía o la distribución de población, tanto espacialmente, como por edades. Parece así que en esa pugna por desentrañar si son los factores asociados al oportunismo –*greed*– o a los agravios –*grivance*– los que están detrás del estallido de las guerras civiles, la posición dominante, al menos desde la Economía, es que son las oportunidades de obtener ganancias de los conflictos las que explicarían de forma preferente su estallido. En todo caso, como señaló John Garang (1945-2005), el líder del *Sudan People's Liberation Army*, las variables interactúan entre sí, de forma que al final es complejo saber cuál es la *causa prima*:

> El peso del abandono y la opresión de los sucesivos gobiernos de camarilla de Jartum tradicionalmente se ha dejado sentir más en el sur que en otras partes del país. Bajo estas circunstancias, el coste marginal de una rebelión en el sur se hizo muy pequeño, cero o negativo; esto es, en el sur merece la pena rebelarse (Biong Deng, 2005).

En esta misma línea de remarcar las relaciones entre el interés personal y los agravios pasados y presentes como fuente de conflicto armado, Korf (2005) documenta con detalle para el caso de Sri Lanka cómo ambas causas se refuerzan:

> Una vez se desata la guerra –por cualquier causa–, la economía política de la guerra conduce a una lógica de clientelismo a lo largo de la línea que sepa-

> ra los «amigos» de los «enemigos». Estas líneas divisorias se refuerzan diariamente en las redes políticas de supervivencia [...] Estos agravios contribuyen a aumentar la motivación de la gente a luchar por la «justicia» (pág. 201).

Aunque sin declararlo abiertamente, parece que la literatura sobre guerra y Economía ha asumido las interrelaciones entre las dos visiones de los elementos económicos explicativos de las guerras civiles y está pasando de contrastar la capacidad explicativa de una y otra visión, en una especie de pugna entre visiones, a estudiar otros aspectos como la importancia de la propia viabilidad de la contienda como elemento explicativo de su existencia. Ésa, al menos, es la propuesta de Collier, Hoefler y Rohner (2006) y su *hipótesis de la viabilidad*: «allí donde una guerra civil sea viable, tendrá lugar sin importar la motivación» (pág. 19). De esta forma, la causa (la avaricia frente al agravio) quedaría en un segundo plano con respecto a la viabilidad del conflicto en sí. En el que es el último trabajo de estos autores, se incorporan dos nuevas variables explicativas de la probabilidad de conflicto: haber sido colonia francesa y el porcentaje de población masculina entre 15- 29 años. La primera variable, que está asociada con un menor riesgo de conflicto, se podría interpretar bien en términos de un legado cultural y administrativo francés diferencial, que haría a estos países menos propicios a las confrontaciones violentas, o alternativamente responder al hecho de que la permanencia militar francesa en sus colonias actúe como elemento desincentivador de las guerras civiles[35]. La segunda variable se explicaría por el hecho de que, como ocurre con la delincuencia (Boyd, 2000), la mayor parte de los combatientes son jóvenes, por lo que cuanto mayor sea el porcentaje de la población en este grupo de edad, mayor será la oferta potencial de reclutas (especialmente en un contexto de pocas alternativas). Estas variables, a diferencias de otras –como el nivel de renta– que pueden ser interpretadas de distinta manera, tienen una clara interpretación en términos de viabilidad: la presencia de tropas extranjeras interesadas en la estabilidad del país hacen la rebelión menos viable, mientras que un alto porcentaje de jóvenes la harían más viable. Este resultado tiene implicaciones importantes en términos de política para la paz: si se quiere evitar la guerra hay que hacerla más costosa.

El estudio de las guerras civiles y sus determinantes económicos realizado en la última década también ha llamado la atención sobre el hecho de que no todas las guerras son iguales (Sambanis, 2001 o Regan y Norton, 2005), por lo que muy posiblemente las mismas variables puedan tener efectos positivos, negativos o nulos sobre la probabilidad de activación de un conflicto civil según el tipo de contienda. De ahí la importancia que tiene complementar los análisis econométricos con estudios de casos que, además, sirvan para desentrañar cuáles son los mecanismos de transmisión entre las variables explicati-

[35] Francia mantiene bases militares permanentes en Chad, Costa de Marfil, Djibouti, Gabón y Senegal. Francia desplegó fuerzas adicionales en Costa de Marfil, en 2002, y en la República Central Africana, en 2003, para hacer frente a crisis en ambos países. En conjunción con la UE ha liderado misiones en la República Democrática del Congo en 2003. En 2004 desplegó fuerzas de apoyo humanitario y de control en la frontera de Chad con Darfur (Sudán). También ha participado en operaciones internacionales en Burundi, Etiopía/Eritrea y Liberia (U.S. Department of State. *Bureau of European and Eurasian Affaire*. Octubre 2006).

vas y la activación del conflicto y los modos en los que estas variables interactúan entre sí. Los estudios de casos también sirven para contrastar la validez de las variables utilizadas para recoger fenómenos no directamente o difícilmente observables, y para detectar posibles variables ausentes. En lo que a esto respecta, la línea marcada por Collier y Sambanis (2005), con un fuerte peso de los estudios de caso articulados alrededor de la alternativa avaricia-agravios, se nos presenta como una forma muy recomendable de profundizar en el conocimiento de la economía política de las guerras civiles.

Por último, el estudio de las guerras civiles probablemente se pueda beneficiar de su inserción en una perspectiva más amplia de violencia de bajo nivel y violencia política que con el tiempo pueda generar las condiciones necesarias para su agravamiento. La necesidad de discriminar cuándo existe una guerra para realizar los análisis estadísticos pertinentes obliga a trabajar en un mundo binario, en donde o hay guerra civil o no la hay, pero su ausencia (en términos de no cumplimiento de los requisitos utilizados para considerar una situación de violencia como guerra civil) no significa que haya paz. Es posible que ello, por necesario que sea, también suponga una limitación en nuestra comprensión de la naturaleza de los conflictos civiles y la relación entre distintas formas de violencia.

En términos de política económica los resultados alcanzados permiten indicar las siguientes posibles líneas de actuación para desactivar conflictos o hacer éstos menos viables:

1) La política de desarrollo aparece como una política de prevención de conflictos, en la medida en que aumenta el coste de oportunidad de comenzar un conflicto a la vez que aumenta el coste de su alargamiento en el tiempo, lo que debería incentivar y facilitar el logro de acuerdos entre las partes implicadas.

2) Lo anterior es especialmente cierto si el proceso de desarrollo es compartido por todos los grupos sociales y étnicos, no dando lugar por lo tanto a expectativas frustradas.

3) Es necesario potenciar la creación de instituciones operativas de resolución de conflictos (ofrecer otras alternativas a la violencia), entre ellas la propia profundización de la democracia en favor de una democracia más participativa que potencie los canales de representación.

4) Puesta en marcha de mecanismos de control del comercio de recursos naturales que dificulte su utilización como sistema de financiación de conflictos. El llamado «Proceso Kimberley» de certificación de diamantes sería un ejemplo del tipo de mecanismos a activar con esta finalidad[36].

[36] El Sistema de Proceso de Certificación Kimberley (KPCS en su acrónimo inglés) es un sistema de certificación puesto en marcha por Gobiernos, la sociedad civil y el sector del diamante en enero de 2003 con la finalidad de impedir que los beneficios del comercio ilegal de esta piedra preciosa acaben financiando conflictos y violaciones de Derechos Humanos. El sistema exige a los Gobiernos que pongan en marcha un mecanismo de control de importaciones y exportaciones y un sistema de «trazabilidad» de los diamantes desde su extracción hasta su pulido. Los miembros signatarios prohíben la entrada en sus países de diamantes en bruto sin la certificación correspondiente. Para una evaluación del funcionamiento del sistema véase Global Witness (2006).

5) Control del comercio de armas ligeras como mecanismo de encarecer los conflictos civiles.

6) El encarecimiento de la opción violenta también se puede conseguir mediante la amenaza de intervención exterior pacificadora (ONU, por ejemplo), siempre que ésta sea creíble. Aunque la información disponible señala que las intervenciones externas sólo acortan la duración de los conflictos cuando ésta se produce del lado de los rebeldes (Collier, Hoeffler y Södebom, 2004), en la medida en que una intervención del lado de las fuerzas gubernamentales puede conducir al refugio de los rebeldes en zonas seguras (dentro o fuera de las fronteras) y al estancamiento del conflicto, existen evidencias recientes, como la decidida intervención de las fuerzas del Reino Unido en Sierra Leona en 2000 y su presión para sacar adelante un proceso de paz, que apuntan a la posibilidad de que algo esté cambiando. En esta línea, de acuerdo con el *Human Security Report 2005*, detrás de la reducción en el número de conflictos activos se encontraría, junto con otros factores (entre ellos la desaparición de las guerras por delegación típicas de la Guerra Fría) el aumento de capacidad de actuación de las Naciones Unidas, liberadas de las limitaciones que la propia Guerra Fría imponía a su funcionamiento[37]. Entre 1990 y 2002 la ONU ha multiplicado por seis el número de misiones diplomáticas preventivas dirigidas a frenar la guerra antes de que empiece, ha multiplicado por once el número de sanciones económicas (entre 1989 y 2001) y ha multiplicado por cuatro el número de misiones de paz (entre 1987 y 1999), aumentando asimismo su dimensión y complejidad.

7) Si consideramos que una de las competencias centrales del Estado es la provisión de seguridad como un bien público, es tautológico señalar que la presencia cotidiana de violencia de distinta intensidad en muchos países del África subsahariana no estaría sino reflejando el hundimiento del Estado, ya sea por incapacidad para desarrollar sus funciones, ya por haber sido «privatizado» *de facto*, en el sentido de que sus recursos se utilizan a favor de unos determinados grupos de población que lo habrían capturado en su beneficio. Por esta vía también el fortalecimiento de las instituciones públicas y de su capacidad de provisión de bienes públicos (entre ellos seguridad) se convierte en una herramienta central de la estrategia de lucha contra los conflictos civiles.

6. Referencias

ANYANWU, John C. (2002), «Economic and Political Causes of Civil Wars in Africa: Some Econometric Results», *Economic Research Paper* 73. African Development Bank.

ANNAN, Jeannie, BLATTMAN, Christopher, and HORTON Roger (2006), *The State of Youth and Youth Protection in Northen Uganda.Findings for the Survey for War Affected Youth*. A Report for UNICEF Uganda. http://sway-uganda.org/SWAY.Phase1.FinalReport.pdf

ALESINA, Alberto y PEROTTI, Roberto (1996), «Income Distribution, Political Instability and Investment», *European Economic Review,* vol. 40(6), págs. 1203-1228.

[37] «La evidencia apunta que el principal elemento de cambio ha sido el extraordinario aumento de activismo de la comunidad internacional dirigido directamente hacia la prevención de conflictos, misiones de paz y creación de condiciones para la paz», Human Security Centre (2005), pág. 155.

ALESINA, Alberto, DEVLEESCHAUWER, Arnaud, EASTERLY, William, KURLAT, Sergio y WACZIARG, Romain (2003), «Fractionalization», *Journal of Economic Growth*, vol. 8, págs. 155-194.

AZAM, Jean Paul y KOIDOU, Constant (2002), «Raising Threats: Containing Political Violence in Côte de Ivoire», World-Bank/Yale University Conference on «The Economics and Politics of Civil War», Yale University, April, págs. 13-14.

AZAM, Jean Paul y HOEFFLER, Anke (2002), «Violence against Civilians in Civil Wars: Looting or Terror», *Journal of Peace Research*, vol. 39(4), págs. 461-85.

BARRO, Robert J. (1991), «Economic Growth in a Cross-section of Countries», *Quarterly Journal of Economics*, vol. 106(2), págs. 407-43.

BARRO, R. J., y LEE, Jong-Wha (1994), «Sources of Economic Growth», *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, vol. 40, págs. 1-46.

BEAÇON, Marie L. (2005), «Relative Resources: Inequality in Ethnic Wars, Revolutions, and Genocides», *Journal of Peace Research*, vol. 42(4), págs. 393-415.

BECKER, Gary (1968), «Crime and Punishment: An economic approach», 1968, *Journal of Political Economy*, vol. 76(2), págs. 169-217.

BIONG DENG Luka (2005), «The Sudan Comprehensive Peace Agreement: Will It Be Sustained?», *Civil Wars*, vol. 7(3), págs. 244-257.

BOSERUP Esther. (1965), *The Conditions of Agricultural Growth: The Economics of Agrarian Change under Population Pressure*, Aldine, Chicago.

BOYD, Neil (2000), *The Beast Within. Why men are violent*. Greystone Books. Vancuver.

BRAUDEL, Ferdinand (1966), *Le Méditerranée et le monde méditerranéen à la époque de Philippe II*. (2.ª ed.), Armand Colin. París.

BRÜCK, Tilman (2001), «Mozambique: The Economic Effects of the War», en Stewart y FitzGerald (2001), *op. cit.*, págs. 56-88.

CAIRNS, Edmund (1997), *A Safer Future: reducing the Human Cost of War*. Oxfam Publications, Oxford.

CHANDRA, Kanchan (2001) «Cumulative Findings in the Study of Ethnic Politics«, *APSA-CP*, Newsletter of the American Political Science Association Organized Section in Comparative Politics, vol. 12(1), págs. 7-11

COGHLAN, Benjamin *et al.* (2006), «Mortality in the Democratic Republic of Congo: a nationwide survey», *Lancet*, 367, págs. 44-51.

COLLIER, Paul (2000), «Doing Well out of War: an Economic Perspective», en Berdal, M. Berdaland D. Malone (eds.), *Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars*, IDRCL/Lynne Rienner. London.

COLLIER Paul (1999), «On the Economic Consequences of Civil War», *Oxford economic papers*, vol. 50(4), págs. 168-83.

COLLIER, Paul y HOEFFLER, Anke (2004), «Greed and grievance in civil war» Oxford Economic Papers 56(4), págs. 563-595.

COLLIER, Paul y HOEFFLER, Anke (2004b), «Military Expenditure in Post-Conflict Societies» CSAE-WPS 213.

COLLIER, Paul y HOEFFLER, Anke (2002), «On the Incidence of Civil War in Africa», *Journal of Conflict Resolution*, vol. 46(1), págs. 13-28.

COLLIER, Paul y HOEFFLER, Anke (2002b), «Aid Policy and Peace. Reducing the Risk of Civil Conflict» *Conflict Prevention and Reconstruction Unit Dissemination Notes*. World Bank.

COLLIER, Paul y HOEFFLER, Anke (1998), «On the economic causes of civil war», *Oxford Economic papers,* vol. 50, págs. 563-573.

COLLIER, Paul y HOEFFLER, Anke (1996), «On the economic causes of civil war», mimeo, Centre for the Study of African Economies.

COLLIER, Paul, HOEFFLER, Anke, y Pattillo Catherine (2002), «Africa´s Exodus: Capital Flight and the Brain Drain as Portafolio Decisions», World Bank. Washington.

COLLIER, Paul, HOEFFLER, Anke, y ROHNER Dominic (2006), «Beyond Greed and Grivance: Feasibility and Civil War». CASE WPS/2006-10

COLLIER, Paul, HOEFFLER Anke, y SAMBANIS Nicholas (2005), «The Collier-Hoeffler Model of Civil War Onset and the Case Study Project Research Design», en Collier P. y Sambanis N. (ed.), (2005), págs. 1-34.

COLLIER, Paul, HOEFFLER, Anke y SÖDERBOM, Mans (2004), «On the Duration of Civil War», *Journal of Peace Research*, vol. 41(3), págs. 253-273.

COLLIER, Paul y SAMBANIS Nicholas (ed.), (2005), *Understanding Civil War*, 2 vol., The World Bank, Washington.

COLLIER, Paul, ELLIOTT, Lani, HEGRE, Håvard, HOEFFLER, Anke, REYNAL-QUEROL, Marta y SAMBANIS, Nicholas (2003), *Breaking the conflict Trap. Civil War and development Policy*. World Bank /Oxford University Press. Oxford.

CRAMER, Christopher (2001), *Economic Inequalities and Civil Conflict*, SOAS, London.

CRUZ, José Miguel, TRIGUEROS, Álvaro, y GONZÁLEZ, Francisco (2000), *El crimen violento en El Salvador: factores sociales y económicos asociados*, Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El Salvador.

DE SOYSA, Indra (2002), «Paradise is a Bazaar? Greed, Creed and Governance in Civil War», *Journal of Peace Research*, vol. 39(4), págs. 395-416

EASTERLY, William y LEVINE, Ross (1997), «Africa's Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions», *Quarterly Journal of Economics*, vol. 112(4), págs. 1203-1.

FEARON, James D. (2005), «Primary Commodity Exports and Civil War», *Journal of Conflict Resolution,* vol. 49(4), págs. 483-507.

FEARON, James D., y LAITIN, David (2002), «Ethnicity, Insurgency, and Civil War», Department of political Science, Stanford University. Publicado en *American Political Science Review* 97, 1 (Febrero 2003), págs. 75-90.

GARFIELD, Richard, PRADO, Erik GATES, Jeffrey y VERMUND, Sten (2002), «Malaria in Nicaragua: community-based control efforts and the impact of war», *International Journal of Epidemiology*, vol. 18, págs. 434-439.

GLOBAL WITNESS (2006), *An Independent Commissioned Review Evaluating the Effectiveness of the Kimberley Process*, Global Witness. London. Globhttp://www.globalwitness.org/reports/show.php/en.00090.html

GOLDSTONE, Jack A. (2000), *et al.* (2000), *State failure Task Force Report: Phase III Findings*, Centre for International Development and Conflict Management, University of Maryland.

GOSHN, Faten y PALMER, Glenn (2003), «A short Investigation of Interstate Conflict since World War II: Has Frequency or Severity Declined?», *Human Security Centre.* Liu Institute for Global Issues, Vancouver, BC, CANADA.

GREEN Eliott D. (2004), «The (Mis)use of Etnicity in Current Political Economy Literature: Conceptual and Data Issues», paper prepared for the WIDER Conference on Making Peace Work. Helsinki, Finland.

GROSSMAN, Herschel I. (1991), «Kleptocracy and Revolutions», *Oxford Economic Papers*, vol. 51(2), págs. 267-83.

HALON, James (1991), *Mozambique. Who Calls the shots?* James Currey & Indiana University Press. London & Bloomington.

HEGRE, Havard, y SAMBANIS Nicholas (2006),«Sensitivity Analysis of Empirical Results on Civil War Onset», *Journal of Conflict Resolution* vol. 50(4), págs. 508-535.

HERBS Jeffrey (2000), *States and Power in Africa. Comparative lessons in authority and control*, Princenton University Press, Princenton.

HIRSCHMAN, Albert O. (1982), «Rival Interpretations of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble?», *Journal of Economic Literature*, vol. 20(4), págs. 1463-1484.

HOEFLER Anke, y REYNAL-QUEROL, Marta (2003), *Measuring the Cost of Conflict.* Mimeo.

HOMER-DIXON, Thomas F., (1994), «Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases», *International Security*, vol. 19(1), 5-40.

HUMAN RIGHT WATCH (2006), *Funding the «Final War». LTTE Intimidation and Extortion in the Tamil Diaspora*, vol. 18, No. 1(C), http://hrw.org/reports/2006/ltte0306/

HUMAN SECURITY CENTRE (2005) *Human Security Report: War and Peace in the 21st Century*. Vancouver, BC, Canada. http://www.humansecuritycentre.org/

HUMPREYS, Macartan (2005), «Natural Resources, Conflict, and Conflic Resolution», *Journal of Conflict Resolution*, vol. 49(4), págs. 508-537.

HUMPREYS, Macartan (2003), «Economics and Violent Conflict».Mimeo. http://www.preventconflict.org/portal/economics/Essay.pdf

IMAI, Kosuke, y WEINSTEIN, Jeremy(2000), «Measuring the Economic Impact of Civil War», CID Working Paper No. 51, Harvard University, Cambridge.

JOHNSON, Douglas H. (2003), *The root causes of Sudan's civil wars*, James Currey & Indiana University Press, Oxford & Bloomington.

KORF, Benedikt (2005), «Rethinking the Greed–Grievance Nexus: Property Rights and the Political Economy of War in Sri Lanka», *Journal of Peace Research*, vol. 42(2), págs. 201 - 217.

KOUBI, Vally (2005), «War and Economic Performance», *Journal of Peace Research*, vol. 42(1), págs. 67-82.

KAPLAN, Robert (1994), «The Coming Anarchy», *Atlantic Monthly*,273(2), págs. 44-76.

KNIGHT, Malcolm, LOAYZA, Norman y VILLANUEVA, Delano (1996), «The Peace Dividend: Military Spending Cuts and Economic Growth», *IMF Staff Papers* 43(1), págs. 1-37.

LACINA, Bethany (2006), «Explaining the Severity of Civil Wars», *Journal of Conflict Resolution*, vol. 50(2), págs. 276-289.

LANCINA, Bethany, y GLEDITSC, Nils Petter (2005), «Monitoring Trends in Global Combat: A New Dataset of Battle Deaths», *European Journal of Population*, vol. 21(2-3), págs. 145-166.

LAIOU, Angeliki (2002), «Writing the Economic History of Byzantium», en A. Laiou (ed.), *The Economic History of Byzantium: from Seventh through the Fifteenth Century.* Dumbarton Oaks. Washington.

LE BILLION, Philippe. (2001), «The political ecology of war: natural resources and armed conflict», *Political Geography,* vol. 20(5), págs. 561-584.

MACCULLOCH, Robert (2005), «Income Inequality and the taste for revolution», *Journal of law and economics*, vol. 48(1), págs. 93-124.

MADDISON, Angus. (2001), *The World Economy. A Millennial Perspective*. OECD. Paris.

MARSHALL, Monty G. (2001), «Assessing the Societal and Systemic Impact of Warfare», Centre for International Development and Conflict Management, University of Maryland.

MARSHALL, Monty G., y GURR, Ted R. (2005), *Peace and conflict 2005*. Centre for International Development and Conflict Management, University of Maryland.
MEREDITH, Martin. (2005), *The State of Africa*, Free Press. London.
MONTALVO, Jorge G., y REYNAL-QUEROL, Marta (2005), «Ethnic diversity and economic development», *Journal of Development Economics*, vol. 76(2), págs. 293-323.
MONTALVO, Jorge G., y REYNAL-QUEROL, Marta (2004), «Fighting against malaria: prevent wars while waiting for the miraculous vaccine». IVIE. Valencia.
MUELLER, Edward N. (1985), «Income Inequality, Regime Repressiveness, and Political Violence», *American Sociological Review*, vol. 50(1), págs. 47-61.
MUELLER Edward N. *et al.* (1989), «Inequality and political violence», *American Political Science Review*, vol. 83(5), págs. 577-596.
MUELLER, Edward N. y Weede Erich (1990), «Cross-National Variations in Political Violence: A Rational Action Approach», *Journal of Conflict Resolution*, vol. 34(4), págs. 624-51.
MUELLER, John (2003), «The remnants of war: Thugs as Residual Combatants», prepared for *International Convention of the Central and eastern European Studies Association,* Budapest, Hungary.
MURDOCH, James C. y SANDLER, Todd (2002), «Economic Growth, Civil wars, and Spatial Spillovers», *Journal of Conflict Resolution*, vol. 46(1), págs. 91-110.
NAFZINGER, E. Wayne y AUVINEN, Juha. (1997), «War, Hunger, and displacement: An Econometric Investigation into the Sources of Humanitarian Emergencies», Working Papers from World Institute for Development Economics Research. Helsinki.
NAFZINGER, E. Wayne y AUVINEN, Juha (2001), «Economic Development, Inequality and Humanitarian Emergencies», Mimeografiado. http://www.ksu.edu/economics/nafwayne/ecdev10-1.pdf
NAGEL, Jack (1974), «Inequality and Discontent: A Nonlinear Hypothesis», *World Politics*, vol. 26(4), págs. 453-472.
OLSON, Mancur (1982), *The Rise and Decline of Nations*, Yale University Press, New Haven.
ORGANSKI, A. F. K. y KUGLER Jacek (1977) «The Cost of major Wars: The Phoenix Factor», *American Political Science Review* 71, págs. 1347-66.
POPKIN, Samuel L. (1979), *The Rational Peasant*. Berkeley University Press, Berkeley.
REGAN, Patrick. M., y NORTON Daniel (2005), «Greed, Grievance and Mobilization in Civil Wars», *Journal of Conflict Resolution*, vol. 49(3), págs. 319-336.
REYNAL-QUEROL, Marta (2002), «Ethnicity, Political System and civil War», *Journal of Conflict Resolution*, vol. 46(1), págs. 29-54.
ROBERTS Les, RIYADH Lafta, GARFIELD Richard, KHUDHAIRI Jamal y BURNHAM Gilbert (2006), «Mortality after the 2003 invasion of Irak: a cross-sectional cluster sample survey». *The Lancet*, Volume 368, Number 9539, pags. 1857-64.
RON, James (2005), «Paradigm in distress?», *Journal of Conflict Resolution*, vol.49(4), págs. 443-50.
ROSS, Michael L. (2002), «Oil, Drugs and Diamonds: How Do Natural Resources Vary in their Impact on Civil War». Mimeo. UCLA.
SAMBANIS, Nicholas. (2004), «What is a Civil War. Conceptual and Empirical Complexities of an Operational Definition», *Journal of Conflict Resolution*, vol. 48(6), págs. 814-858.
SAMBANIS, Nicholas. (2001), «Do Ethnic and Nonethnic Civil Wars Have the Same Causes?, *Journal of Conflict Resolution*, vol. 45(3), págs. 259-282.
SAVE THE CHILDREN (2000), «Children of the Gun», *Children in Crisis* project report, September.
SECHSER, Todd (2004), «Are Soldiers Less War-Prone than Statesmen?», *Journal of Conflict Resolution*, vol. 48(5), págs. 764-774.
SIMON, Julian L. (1998), «Lebensraum: Paradoxically, Population Growth May Eventually End Wars», *Journal of Conflict Resolution*, vol. 33(1), págs. 164-180.
SOARES, Rodrigo R. (2004), «Development, crime and punishment: accounting for the international differences in crime rates», *Journal of Development Economics*, vol. 73, págs. 155-184.
STEWART, Frances y FITZGERALD, Valpy (2001), *War and Underdevelopment*, vol. 2: Countries experiences, Queen Elizabeth House in Development Studies. Oxford University Press. Oxford.
SURVEY OF WAR AFFECTED YOUTH, SWAY, (2006), *Research Brief 1: The Abduction and Return Experiences of Youth*, Research & Programs for Youth in Armed Conflict in Uganda, April.
TILLY, Charles (1990) *Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990*, Basil Blackwell, Cambridge, Mass.
URDAL, Henrik (2005), «People vs. Malthus: Population Pressure, Environmental Degradation, and Armed Conflict Revisited», *Journal of Peace Research*, vol. 42(4), págs. 417-434.
WEINSTEIN, Jeremy M. (2005), «Resources and the Information Problem in Rebel Recruitment», *Journal of Conflict Resolution,* vol. 49, págs. 598-624.
WORLD BANK (2006), *World Developmen Report 2007. Development and the Next Generation*. World Bank, Washington.
WORLD DEVELOPMEN INICATORS, WDI (2006). World Bank. Washington.